

Distr.  
RESTRINGIDA

LC/R.723  
16 de diciembre de 1988

ORIGINAL: ESPAÑOL

---

**C E P A L**  
**Comisión Económica para América Latina y el Caribe**

**LA ACTUAL DINAMICA SOCIOECONOMICA COSTARRICENSE  
Y LAS OPCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN EL  
OCASO DEL SIGLO XX \*/**

**\*/** Esta contribución de la Dra. Ana Sojo fue presentada al Seminario sobre Opciones de Desarrollo Social para los Años Noventa (San José, Costa Rica, 15 al 18 de noviembre de 1988). Las opiniones expresadas en este estudio son de la exclusiva responsabilidad de su autor y pueden no coincidir con las de la Organización.

Este documento no ha sido sometido a revisión editorial.

88-12-1854



## INDICE

	<u>Página</u>
INTRODUCCION	1
I. LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS POR EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO.	3
II. LA POLITICA ECONOMICA DEL PERIODO 1978-1988 . . . . .	4
1. El gobierno de la Unidad Social Cristiana: la imposibilidad de la estabilización económica . . . . .	4
2. El éxito de la estabilización heterodoxa y el inicio del ajuste estructural . . . . .	5
3. Continuidad y modificaciones de las orientaciones previas . . . . .	8
III. ALGUNAS TESIS SOBRE LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA CRISIS Y DE LA POLITICA ECONOMICA Y SOBRE LA ORIENTACION DE LA POLITICA SOCIAL . . . . .	14
1. El impacto en el nivel de vida de la población . . . . .	14
2. Vigencia redistributiva de la política social del Estado en un período de crisis económica . . . . .	15
3. Modificaciones de la política social en un contexto de crisis económica . . . . .	17
a) Disminución real del salario social . . . . .	17
b) Racionalización de la política social y procesos de centralización en el seno del Estado . . . . .	18
c) Nuevas relaciones con el usuario y privatización .	20
d) Focalización de esfuerzos y conflictividad social	21
e) Política específica por sector para enfrentar la crisis fiscal . . . . .	22
1) La política de salud . . . . .	22
ii) Innovaciones en política de vivienda . . . . .	24

IV. EL ESPECTRO DE OPCIONES DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO EN LOS PROXIMOS AÑOS . . . . .	27
1. Opciones en el campo económico . . . . .	28
2. Opciones en la política social . . . . .	30
NOTAS . . . . .	32
BIBLIOGRAFIA . . . . .	34
ANEXO CUADROS . . . . .	41

## INTRODUCCION

Desde los años cincuenta , Costa Rica se distinguió en América Latina por una relación relativamente armónica entre el sector empresarial y los sectores populares, cuya aquiescencia sistémica ha contribuido indudablemente a la estabilidad política. En el contexto latinoamericano, Costa Rica ha mostrado importantes logros en el desarrollo social. Todo ello ha estado estrechamente relacionado con el régimen político democrático y con algunas orientaciones fundamentales de la política económica y social. El Estado se consolidó como un soporte fundamental de la acumulación privada y mostró su eficacia como terreno de constitución de compromisos entre los intereses contradictorios de diversos grupos sociales (Sojo, 1984a).

Se promovió el desarrollo industrial orientado hacia el mercado nacional y desde los sesentas también hacia el Mercado Común Centroamericano. También el sector agropecuario fue fuertemente apoyado por políticas estatales; éste se centró en unas pocas exportaciones tradicionales -de las cuales el café y el banano llegaron a alcanzar una elevada productividad- y en abastecer el mercado interno. En la década del setenta se establecieron ya exoneraciones fiscales para exportaciones a terceros mercados.

La importante expansión del mercado interno fue congruente con una política de salarios crecientes. Durante los años sesenta y hasta 1972, los salarios crecieron en términos reales ; considerando los años setenta en conjunto, a pesar de la caída en los años de mayor inflación, hubo un incremento de los salarios reales.

Por otra parte, al lado de una estructura tributaria crecientemente regresiva, fue fundamental el impacto redistributivo del gasto social por medio de instituciones de bienestar . Algunas de estas instituciones, proveedoras de un salario social, tuvieron su origen en los agitados años cuarenta; más tarde experimentaron un gran desarrollo y diversificación, incluso en la década del setenta cuando ya se avizoraron problemas en el crecimiento económico.

Naturalmente la crisis económica reciente y las políticas emprendidas han tenido en Costa Rica consecuencias respecto del empleo , del nivel y de la distribución del ingreso y han acarreado modificaciones del Estado de bienestar, aspectos cuyas peculiaridades abordaremos en este trabajo. Vislumbrar opciones

del desarrollo social en la década del noventa sería ocioso si nos atuviéramos únicamente a distinguir conceptualmente aquellas en juego: si bien tal distinción es necesaria, igualmente importante es considerar la viabilidad de cada una. Tal viabilidad, relacionada con elementos de orden político y económico, está profundamente determinada por el grado de implantación actual de tendencias peculiares de desarrollo socioeconómico. Por esta razón, indagaremos fundamentalmente en las líneas de fuerza de la presente década que marcan la situación actual y de los años venideros.

Como bien se ha señalado, las políticas económicas y las políticas sociales son dimensiones inseparables del desarrollo, cuya integración a favor de la inversión, del empleo, de la distribución, constituye la base de la democracia (CEPAL, 1986b, p.6). En ese sentido, la política social no es la única responsable por la equidad, cuyo logro no está encapsulado en los servicios sociales sino que atraviesa todas las áreas de políticas económicas y sociales y las perspectivas de corto y largo plazo. De allí que con los problemas sociales y sus soluciones insertos adecuadamente en la temática del desarrollo, se evita su aislamiento y su subordinación estricta al objetivo del crecimiento económico, mientras que reducir la preocupación por la equidad al ámbito de la política social implica no comprender su verdadera naturaleza e impide la solución de sus problemas a largo plazo (CEPAL, 1987a, p.7).

Con este punto de partida, consideraremos en primer término globalmente las orientaciones de la política económica de las tres últimas administraciones, (1) enfatizando sus consecuencias sociales, para precisar después el carácter de las políticas sociales y señalar las posibles opciones de desarrollo social de los años venideros. Acotamos que los diversos indicadores sociales utilizados sólo pueden dar cuenta oblicuamente de los efectos de la política económica y social sobre el bienestar de la población. Tales políticas actúan combinadamente con y sobre fenómenos propios de otros ámbitos de la crisis, de gran impacto social: la causalidad de estos indicadores reside también en otras variables o planos que no son objeto de nuestro análisis.

Hemos seleccionado algunos pocos aspectos de las repercusiones que ha tenido la crisis y la política económica y social para el bienestar de la población costarricense. Destacan los efectos del ciclo económico sobre las remuneraciones y aquellos relativos a las modificaciones del salario social, producto de medidas de racionalización del gasto público. Pese al deterioro percibido en la política social, no se ha implantado un proceso de desmantelamiento de las instituciones propias del Estado de bienestar (Sojo, 1986), cuyo importante efecto redistributivo sigue siendo vigente. La estabilización financiera preconizada para enfrentar el déficit de las instituciones de bienestar y de seguridad social se dió fundamentalmente mediante una racionalización del gasto que

privilegió la reforma administrativa, la generación de ingresos y la reestructuración de los servicios (Rivera y Güendell, 1988a, pp.18 y 19).

Todo ello nos remite a una orientación consensual de la política en Costa Rica, con frutos importantes como los efectos que apreciamos en el logro de la estabilización económica durante el periodo de Monge. Las perspectivas estarán, junto con otros factores, estrechamente condicionadas por el signo y los resultados del ajuste estructural y por las condiciones de renegociación de la deuda externa.

Estos condicionantes o la implantación de otras opciones en la política económica y social a contrapelo de las vigentes marcan los posibles escenarios de las próximas décadas.

## I. LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS POR EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Costa Rica presentó en relación con los demás países centroamericanos una deuda precoz, que en 1970 era la más alta de la región, destinada fundamentalmente a financiar obras de infraestructura. Hasta 1977, la participación del sector privado es predominante. Entre 1977 y 1982 la deuda se duplicó, producto del deterioro de los términos del intercambio, del incremento de las tasas de interés y de la aplicación en el periodo de Carazo de políticas macroeconómicas inconsistentes, que en relación con la deuda derivaron en una declaración de moratoria (Rivera, 1988, p.3). El deterioro de las condiciones para Costa Rica posterior a la ronda de renegociación de 1983 con la banca privada, fue calculado por CEPAL para 1982-1984, expresado como porcentaje en 28% y el incremento en el costo real del crédito en 16.9. (CEPAL 1985, p.69) En 1985 se inició la segunda ronda que concluyó con un acuerdo de refinanciación con los acreedores.

Desde 1983, el ritmo de crecimiento de la deuda externa total del país se desacelera. En 1983, la deuda ascendía a 3,427.20 millones de dólares, en 1986 a 3,643.90 y al 31 de diciembre de 1987, a 4,002.60 millones de dólares. (Ver cuadro No. 1 y cuadro No.4). Ello refleja compromisos en materia de endeudamiento, crecientes dificultades para tener acceso a capital fresco y el importante papel de la asistencia financiera externa, particularmente de la estadounidense. En 1982, la deuda externa total representaba un 121.60% del producto interno bruto; con la recuperación económica y el comportamiento de la deuda, en 1986 representó un 85.40% del PIB (ver cuadro 1).

El servicio total de la deuda resultó sumamente oneroso para el país. En 1983 representaba el 23.90% del PIB y el 85.30% de las exportaciones; en 1985 un 13.30 del PIB y un 52.60% de las exportaciones; los pagos de intereses de ese año representaban un 34.80% de las exportaciones; en 1986, el servicio total

representaba un 10.50% del PIB y un 40.40% de las exportaciones (Ver Cuadro No. 2). Las transferencias netas de capitales son considerables: en millones de dólares, ascendieron en 1983 a 120.20, en 1984 a 24.40, en 1985 a 206.60 y en 1986 -según estimación preliminar- a 274.90 (Cuadro No. 1)

Tales obligaciones de pago por una parte hicieron al país dependiente de nuevos flujos de capitales para poder hacerles frente, y por su magnitud condujeron a una imposibilidad de cumplimiento a pesar de los avances en materia de estabilización y ajuste. Se constata una creciente discrepancia, por ejemplo, entre los pagos contractuales de intereses y los efectivos. En 1985 los últimos cubren un 95% de los contractuales, para descender en 1986 a un 70%, en 1987 a un 48% y en el primer semestre de 1988 a un 35% (Ver cuadro No.3). No ha sido posible llegar a un nuevo acuerdo con los bancos en los términos propuestos por Costa Rica y que más adelante plantearemos. Al igual que durante el periodo de moratoria, el cual duró casi dos años, ello no ha llevado a una declaración de incumplimiento por parte de los bancos acreedores. A continuación veremos el ambiente macroeconómico y las políticas en que se inserta el comportamiento de la deuda aquí bosquejado.

## II. LA POLITICA ECONOMICA DEL PERIODO 1978-1988

### 1. El gobierno de la Unidad Social Cristiana: la imposibilidad de la estabilización económica

1978 marca un punto de inflexión en la historia costarricense, con el gobierno de la Unidad Social Cristiana, coalición en extremo heterogénea, cohesionada pasajeramente por el rechazo del llamado Estado empresario, el cual había experimentado un gran desarrollo en el periodo de Daniel Oduber, orientado hacia procesos de acumulación estatal (Sojo, 1984).

La errática política económica y sus errores profundizaron la crisis, relacionada con la crisis de la balanza de pagos, el deterioro de los términos del intercambio y el agotamiento del financiamiento externo. Se trató de poner en práctica una crítica radical al modelo de sustitución de importaciones y a la protección estatal de la producción agrícola para el mercado interno, guiándose por un ideario neoliberal monetarista y por una visión estática de las ventajas comparativas del país.

Las contradicciones internas del gobierno, privado de un acuerdo respecto de tales orientaciones, y diversas resistencias en la sociedad costarricense impidieron su plena vigencia; sin embargo, tuvo lugar una consolidación del capital financiero, producto del encarecimiento inicial del crédito via liberalización de las tasas de interés de la eliminación de



controles sobre las financieras privadas, de la liberalización del mercado cambiario y fundamentalmente mediante la flotación del colón. (Rivera, 1982)

A partir de 1981 se puso en práctica un programa de estabilización de la economía mediante políticas contractivas de la demanda, como aquellas contempladas en los dos convenios acordados con el FMI, las cuales no atendían el impacto sobre la estructura de precios relativos y sobre la estructura de los ingresos. Esta orientación ortodoxa, sumada a la liberalización de las tasas de interés y del mercado cambiario, condujo a la estanflación y a una pugna distributiva, lo cual acentuó la desestabilización y la incertidumbre social. (Rivera, 1987a)

En un contexto agravado por problemas en la balanza de pagos, la aceleración de la inflación y la pérdida de control sobre las principales variables económicas se debieron fundamentalmente a la forma en que se procedió a devaluar. (Rivera, 1987, pp.15-18). La incertidumbre en el mercado cambiario, el desorden del mercado de divisas, el impacto inflacionario relacionado con el alto componente importado de la economía, se magnificaron debido a las fluctuaciones y al deterioro creciente del tipo de cambio. Por otra parte, rigideces tributarias sumadas a la inflación condujeron a un record del déficit fiscal, el cual llegó a ascender a un 14.2% del PIB.

Las consecuencias sociales de la crisis económica a fines de los setenta no se dejaron esperar. Para 1981 se calculó que en un lapso inferior a los tres años la caída del salario real promedio fue del 30.5%, concentrándose en 1981 un 75% de ésta. Sin embargo, al igual que en años anteriores, los salarios más bajos fueron protegidos. La caída mayor se registró en el sector de servicios básicos y dentro del sector público (Villasuso y Trejos, 1982, p. 48).

## 2. El éxito de la estabilización heterodoxa y el inicio del ajuste estructural

En mayo de 1982 con el gobierno de Monge se inicia una nueva fase de la política económica. Las metas fundamentales eran reconstituir el deteriorado tejido social y estabilizar la postrada economía. Se implanta una experiencia heterodoxa de estabilización. Cinco objetivos específicos fueron definidos para controlar la crisis: 1) reorganizar, estabilizar y unificar el tipo de cambio, 2) reducir sustancialmente el déficit presupuestario, 3) una política de ingresos para manejar reajustes y remuneraciones, 4) retorno a una base contractual para el pago de la deuda, 5) renegociar un acuerdo con el FMI y renovar los flujos de instituciones multilaterales y de gobiernos amigos (Castillo, 1986, p.188).

Hubo una clara percepción respecto de la necesidad de lograr un consenso social que tuviera repercusiones estabilizadoras en la economía. Destacan entre las medidas tomadas a tal fin, en relación con la empresa privada el programa de salvamento de empresas. Respecto de los sectores populares, el programa de repartición de alimentos. Como se ha afirmado, "el énfasis puesto en la negociación exige una fuerte presencia del Estado, pues los compromisos globales sólo pueden establecerse a nivel de lo político. Desde el punto de vista de la política económica ello implicaba necesariamente asignar al Estado una fuerte participación en el restablecimiento de los equilibrios económicos fundamentales de manera que ello no afectara los equilibrios políticos. El alto intervencionismo estatal que caracteriza la política de estabilización aplicada es una clara expresión de esta circunstancia y a la vez causa importante de los resultados exitosos de la política" (Rivera, 1988, p.16).

Se enfrentó la inflación fundamentalmente recuperando el control sobre el tipo de cambio y aunque se siguió una política de crédito conservadora, se pospuso el ajuste de las tasas reales de interés en moneda nacional, a diferencia de lo propuesto por el FMI. (Rivera, 1984; Castillo, 1986, p.198; Rodríguez, 1988, p.102.)

Se planteó un esquema de ajuste severo, estableciendo como foco del programa el monopolio de las divisas por parte del Banco Central. Se inició una revaluación del colón -que pasó de 57.16 colones por dólar en agosto de 1982 a 42.1 en octubre de 1983- y una unificación del tipo de cambio en torno al cambio interbancario.

Respecto de las transformaciones del modelo económico, la estrategia es gradualista, ya que la promoción de las exportaciones no tradicionales (2) a terceros mercados se da fundamentalmente mediante exoneraciones fiscales indiscriminadas y crédito (Rivera y Sojo, 1986, punto 5.3.). A diferencia de las propuestas neoliberales planteadas durante el gobierno anterior (Rodríguez, 1980), no se realizó un tratamiento de choque ortodoxo en comercio exterior (Rodríguez, 1988). (3)

Los incentivos comprenden exoneraciones de derechos sobre insumos, equipo y maquinaria, del impuesto sobre la renta por doce años, certificados de abono tributario fijados en un máximo de 30%. Para las zonas francas, exoneración de derechos sobre insumos, equipo y maquinaria y de impuestos sobre la renta por diez años, y libre manejo de divisas. (Fuentes, 1988a, cuadro II-2)

Las reducciones más significativas del arancel común centroamericano con el NAUCA II de 1984, se dan para Costa Rica en dos agrupaciones: alimentos y químicos, cuya protección efectiva había sido muy alta en relación con los demás países (Fuentes, 1987, p.27). El convenio estableció el marco normativo del nuevo arancel externo común, el cual se

acordó finalmente en octubre de 1985 para ser aplicado a partir de enero de 1986, culminación de diez años de negociaciones aceleradas por la eventualidad de que Costa Rica adoptara unilateralmente un nuevo arancel en relación con el PAE en vías con el Banco Mundial. (Fuentes, 1988, p.12)

La política salarial inicialmente fue sumamente restrictiva. Se definió una canasta básica salarial compuesta por 16 productos de consumo básico, sometida a control de precios. Los incrementos salariales se fijaron cada seis meses de acuerdo únicamente con los incrementos de esta canasta. El salario mínimo promedio real cayó en 1981 en un 10% y en un 5% en 1982. (Castillo, 1986, p.200) Los salarios reales de los estratos inferiores fueron reajustados en forma desproporcionada lográndose proteger su capacidad adquisitiva (4). Ello a diferencia del comportamiento de los salarios reales más bajos predominante en América Latina, los cuales caen más que el promedio. (Tokman et. al., 1988)

La política fiscal denominada "brutal" incluso por Castillo, destacado gestor de la política económica del período, condujo a enormes elevaciones de las tarifas de los principales servicios públicos; los ingresos del Gobierno Central según cifras del FMI pasaron de constituir un 13.6% del PIB en 1981 a un 17.1% en 1984, y los del sector público no financiero de un 18.3% en 1981 a un 28.3% en 1984 (Rivera, 1987a).

Destaca el alto grado en que esta política salarial y fiscal fueron toleradas; por otra parte, el gobierno las atemperó cuando surgieron beligerantes protestas populares, como aquellas vinculadas con la elevación de las tarifas eléctricas. Estas políticas, unidas a la disminución del gasto público -según el FMI éste pasa de constituir un 32.7% del PIB en 1981 a un 27.2% en 1982-, y a la afluencia de financiamiento externo hicieron viable el éxito de la estabilización. Vinculado con una reactivación del mercado interno, en 1984 se registró un crecimiento del PIB de un 6.6%; en 1983 y 1984 se dió un aumento real de los salarios en un 19 y 8% respectivamente. (Villasuso, 1985, p.18)

A partir de 1984 se puede distinguir una fase de estabilidad económica significativa, con una leve reactivación y una gran vulnerabilidad externa asociada con la estrategia utilizada en la renegociación de la deuda, que implicaba una fuerte dependencia de los desembolsos de los organismos financieros internacionales para cumplir con su servicio y mantener la estabilidad económica (Rivera, 1988). Este último factor permite a los organismos financieros internacionales y a la AID una gran incidencia en la política económica, ejercida mediante estrategias de condicionalidad cruzada (Lizano y Charpentier, 1987). La vulnerabilidad externa se hizo evidente en 1986; desde diciembre de 1985 se bloquearon una serie de desembolsos por parte del Banco Mundial y de la AID, luego de lo cual se reinició otra etapa de condicionalidad cruzada en torno a disminuir 5.000

plazas en el sector público; a reducir el déficit fiscal disminuyendo en 800 millones de colones el del Consejo Nacional de Producción -organismo encargado de la comercialización de granos básicos- y a reducir las sobretasas a las importaciones (Rivera, 1988).

### 3. Continuidad y modificaciones de las orientaciones previas

Al iniciarse el gobierno de Oscar Arias eran palmarios los límites de la estrategia en financiamiento externo de la administración anterior. La atención de la deuda y la disminución del flujo financiero bilateral desde los EEUU, ocurrido sobre todo a partir de 1986, constituían la espada de Damocles que pendía sobre la reactivación económica.

Se hacía ya extraordinariamente difícil seguir reduciendo el gasto público como recurso para financiar el pago de la deuda. Los coeficientes de las finanzas públicas mostraban claramente que lo fiscal no era la causa primigenia de los problemas económicos del país y los avances en la reducción del gasto público y del déficit financiero. Es así como este último, considerando su relación con el PIB, en el caso del gobierno central ascendía a un 3,3% en 1986 y a un 2% en 1987 y en el sector público no financiero a un 1,7% y un 0,3% para los mismos años. Por otra parte, la relación del gasto público con el PIB era en 1986 de un 17,6% y de un 17,6% en 1987 y en el sector público no financiero de un 45,6% en 1986 y de un 43% en 1987. (Mideplan, 1988a, p.41)

En relación con sus consecuencias sociales, cabe referirse a la política fiscal. Para los años setenta se había comprobado una incidencia regresiva de los impuestos, al igual que en el acceso a medios de producción. La necesidad de enjugar el déficit fiscal recurriendo crecientemente, en términos absolutos y relativos, a impuestos indirectos y la promoción de exportaciones mediante exoneraciones al impuesto sobre la renta posiblemente han hecho más regresivo el sistema, aspecto sobre el cual no hay cuantificaciones detalladas. En 1986, por ejemplo, sobresalió el escaso dinamismo de los impuestos a los ingresos y utilidades, debido en buena medida a los beneficios fiscales otorgados por la ley No. 6955 de contratos de exportación y la No. 7071 sobre incentivos a la producción industrial. Por esto en los últimos años, decrece la participación relativa de los impuestos a los ingresos y utilidades y aumenta significativamente la de los impuestos sobre transacciones internas de bienes y servicios, sobre todo vía impuesto de ventas e impuesto de consumo (Carrillo, 1988, pp.35-58).

En octubre de 1986 se dan a conocer nuevos lineamientos en la política económica. Entre ellos sobresalen:

- a) destinar una proporción del financiamiento externo equivalente al 3% del PIB para proyectos de desarrollo económico,
- b) renegociar montos más amplios de la deuda sin restringirse, como hasta entonces, a los vencimientos de los próximos dos años,
- c) incrementar el flujo de recursos externos aún cuando aumente el endeudamiento,
- d) diversificar las fuentes de financiamiento,
- e) variar las condiciones de la deuda existente,
- f) limitar el servicio de la deuda a un porcentaje sobre el valor de las exportaciones,
- g) lograr que la banca privada asuma su responsabilidad en el problema del endeudamiento mediante un pago parcial en colones para utilizarse en proyectos de desarrollo,
- h) lograr dos acuerdos con el Banco Mundial destinados a obtener recursos financieros para las transformaciones estructurales (Rivera, 1987a).

Detrás de esta orientación está el planteamiento de que "Costa Rica reconoce sus obligaciones externas, pero también reconoce que el crecimiento económico es la solución para responder adecuadamente a las necesidades de la población, y a la vez, para cumplir eventualmente con sus compromisos de endeudamiento. Hay que crecer para poder pagar". (Charpentier, 1987).

En 1986 el gobierno planteó a los bancos una propuesta de renegociación del saldo total de la deuda, a un plazo de 25 años con 7 años de gracia y a tasas de interés fijas inferiores a las de mercado, términos que no fueron aceptados sobre todo en lo relativo a las tasas de interés. En junio de 1987 se presentó una nueva propuesta, en la cual se mantiene la condición de negociar el saldo total de la deuda, se proponen 20 años como plazo para cancelar el principal y un mecanismo de pago de intereses basado en la capacidad de pago del país, aceptando una tasa de interés equivalente a la de mercado (Rodríguez, 1987, p.67). Aún no se ha logrado llegar a un acuerdo; mientras tanto se ha aceptado el pago parcial de intereses, de acuerdo con una fórmula de capacidad de pago propuesta por el gobierno y avalada por el FMI (Rivera, 1988, p.8).

En 1987 el PIB creció en un 3.9%. Su crecimiento se debió principalmente a la expansión de los sectores comercio e industria, mientras que el valor agregado de la actividad agropecuaria decreció en un 2.5%, fundamentalmente por la disminución del hato y de la producción de arroz (Mideplan, 1988, p.4). A pesar de la marcada recuperación del PIB desde 1983, no se ha recuperado el nivel de 1978, el más alto experimentado en el país.

El plan de ajuste estructural con el Banco Mundial aún no ha sido aprobado por diferencias -que han tenido también expresión en el gobierno- afloradas en la polémica parlamentaria para su aprobación fundamentalmente en torno de modificaciones del sistema financiero, las cuales afectan a la banca estatal.

El problema actual se concentra en definir el ajuste estructural. El gobierno ha afirmado que se enfrenta en el ajuste estructural un dilema entre aquella perspectiva compartida por los organismos financieros internacionales, proclive a una liberalización económica, y la de impulsar un cambio estructural con clara participación del Estado, que contribuya a crear ventajas comparativas dinámicas, asegure una amplia participación social en los beneficios del cambio en la estructura económica y provea mecanismos en el periodo de transición para amortiguar el impacto del ajuste para los grupos desposeídos (Mideplan 1987c, pp.1-8).

En el diagnóstico del Banco Mundial realizado en el marco de las negociaciones, se plantean como características negativas del sistema económico: la existencia de un régimen altamente proteccionista, que junto con el bajo crecimiento de las exportaciones no tradicionales incide negativamente en la balanza comercial; un sector público de un tamaño no financiable carente de un énfasis en inversiones acorde con el ajuste estructural y la promoción de las exportaciones, ausencia de mecanismos adecuados para superar una estructura irracional de gastos corrientes; un sector financiero irracional que imposibilita una adecuada asignación de recursos por distorsiones como el crédito subsidiado, tasas de interés que no consideran diversos grados de riesgo; en el sector agrícola, mantención de fondos específicos, restricciones inconvenientes a importaciones de insumos básicos, uso de precios de sustentación, crédito subsidiado.

Dentro de los principales propósitos del PAE sobresalen la reducción de los aranceles; nuevos mecanismos de promoción de las exportaciones que eliminen los problemas fiscales acarreados por los CATS y protejan a las exportaciones de acusaciones de "dumping"; un programa de inversiones públicas acorde con las prioridades de transformación de la estructura económica y metas de ahorro para el sector público.

Como parte de la negociación del segundo PAE con el Banco Mundial, se llevó a cabo una reducción de aranceles en octubre de 1987. A partir de julio de 1988 se acordó reducir el arancel a un máximo del 40%, en seis reducciones semestrales, con excepciones en textiles, confección y calzado, para las cuales el periodo de reducción durará diez semestres (Fuentes, 1988, p.12 y cuadro No.5)

Es importante señalar el dinamismo de las exportaciones no tradicionales de Costa Rica en los últimos años. En Centroamérica es el país que ha mostrado mayor constancia en la política de promoción y desarrollo de exportaciones no tradicionales, con el uso de los CATS y la política de minidevaluaciones (Fuentes, 1988a, p.8). Se ha calculado que el valor de las exportaciones no tradicionales (incluyendo cacao) pasó de un 18.2% en 1982 a un 32.4% del valor total de las exportaciones en 1987

(Ib.,p.9). Considerando Centroamérica, Costa Rica incrementó constantemente su participación, pasando de un 23.7% del total en 1982 a un 34.9% en 1987. Distinguiendo entre nuevas y viejas exportaciones no tradicionales, la participación relativa en Centroamérica aumentó para los mismos años del 33% al 42.8%. (Ib.p.10).

De las diez exportaciones no tradicionales más importantes en 1987, seis eran de tipo agropecuario: camarones, pescado fresco o refrigerado, piñas, legumbres frescas o refrigeradas, flores y plantas ornamentales. De las industriales, se destacan prendas de vestir e hilado de maquila, un leve incremento en medicamentos y alcohol etílico (Ib., p.10). Diez productos no tradicionales han enfrentado barreras no arancelarias en los EEUU y doce en la CEE (Ib., pp. 14 - 15). Ello expresa la necesidad de aumentar la competitividad y la eficiencia combinando políticas y acciones empresariales en la producción y en el área de comercialización, al igual que la importancia de exportar productos agrícolas o minerales con un alto grado de procesamiento (Ib., p.15-16).

La conflictividad social se ha centrado en torno al problema campesino, sobre todo por parte de los productores de granos básicos, unidos en algunas demandas con los grandes productores de arroz, conflicto situado en la polémica respecto del ajuste estructural en la agricultura, la nueva inserción en el mercado mundial y la determinación de ventajas comparativas. Las demandas campesinas giran en torno al acceso de los pequeños productores al crédito; a la importación de alimentos y su repercusión en la producción interna y a las indefiniciones de la llamada agricultura de cambio respecto de qué sembrar, las condiciones de apoyo a los cultivos, sus riesgos y proyecciones. (CENAP et. al., 1988)

Respecto de la dimensión del Estado, es importante por sus repercusiones considerar su significado respecto del empleo. No se han implantado políticas de despidos masivos en aras de una racionalización de las instituciones estatales. En la presente década las tasas de desempleo abierto en el país se han mantenido relativamente bajas (Ver cuadro 5a). En el mercado laboral se mantuvieron discriminaciones de la mujer por su género, expresadas en acceso a las ocupaciones, tasas de ocupación e ingresos, aún en presencia de ventajas educativas de la mujer. Considerados los salarios promedio por sexo, en 1980 el de la mujer era un 90% del masculino, en 1982 un 84% y en 1985 un 89%; este comportamiento fue propio del sector privado (Moritz, 1986,p.90) y muestra como en medio de la crisis hubo un sesgo salarial que profundizó la discriminación por género.

En el sector público, los años críticos fueron 1981 y 1982 y en el privado los años 1983 y 1984. De 1980 a 1986, el empleo público creció en 26.300 personas, lo cual significa un crecimiento anual promedio de 3.1%, notablemente inferior al de 10.1% promedio de la década anterior (Mideplan 1988a, pp.9-15;

Argüello y Labell, 1988, p. 23). Las instituciones del gobierno central, a diferencia de las autónomas experimentan una elevación mayor del empleo, a diferencia de los años setenta (Ib.) Ello puede sugerir un énfasis racionalizador mayor en éstas últimas. Se observa una concentración de profesionales empleados por el gobierno central en el área metropolitana de San José y una descentralización regional de las instituciones autónomas (Ib., p.31).

El sector privado pasó de reunir un 83,2% del empleo en 1976 a un 80.4% en 1980 y un 83.4% en 1987 (Mideplan 1988a, p.12), mostrando así su frágil capacidad de creación de empleo, ante lo cual el Estado sigue actuando como contrapeso, sobre todo en centros urbanos pequeños e intermedios (Argüello y Labell, 1988, p.27). En algunas ciudades empobrecidas, el impacto del empleo público es enorme: para 1986, en Limón representaba cerca del 70% del empleo asalariado y en Puntarenas algo más del 60%, lo cual ha contribuido a la limitada expansión del empleo informal, que en el caso de Limón no llegaba al 10%. (Ib., p.27 y 28).

Junto con el cambio respecto del endeudamiento externo, hay otro plano, con eventuales repercusiones económicas, en que se dió un importante punto de inflexión en el gobierno de Oscar Arias: el impulso del Plan de Paz conocido como Esquipulas II, con el cual se revaloró la perspectiva regional.

En lo que iba de la década, antes de esa iniciativa, todos los países centroamericanos a raíz del quebrantamiento del Mercado Común Centroamericano y de la polarización política en el itmo habían tratado de sacar provecho de esa situación, en una forma individual y competitiva acorde con una lógica geopolítica peculiar según cada país, que a mediados de la década hizo ostensibles sus límites y riesgos (Sojo, 1988).

En el caso de Costa Rica, la estrategia individual y competitiva en el gobierno de Monge había significado distanciarse claramente de Managua en lo político y en lo discursivo, junto con una combinación frágil y difícil de resistencias a las presiones norteamericanas, apelando a la Proclama de Neutralidad. La polarización regional significaba para el país graves riesgos y los resultados de esta vía habían sido a la larga limitados: el flujo de recursos norteamericanos canalizado fundamentalmente vía AID, que había ayudado a paliar el severo ajuste económico (Rosenthal, 1986; Rivera y Sojo, 1987) aunque de lejos no compensara el esfuerzo de ahorro interno destinado a enfrentar la deuda, había alcanzado su clímax en 1983 para luego decrecer sensiblemente, sobre todo a partir de 1986. (Cuadro 5b)

Al experimentarse el desgaste de la estrategia geopolítica nacional competitiva y sobre todo al evaluarse las graves repercusiones para el país de la guerra y la polarización política de la región, Centroamérica adquirió otra dimensión para Costa Rica, hasta entonces fundamentalmente valorada en



tanto no se había abandonado el MCC. Con el Plan de paz se lanzó a un primer plano la posibilidad de cooperación regional en diversos terrenos a partir de la estabilidad política; el gobierno apostó porque los acuerdos internos requeridos en cada país se hicieran posibles mediante una iniciativa vinculante para lo interno desde lo regional (Sojo, 1988). Paradójicamente, luego de esta contundente muestra de autonomía ante el conflicto centroamericano, en el año 1988 se elevaron sensiblemente los fondos aportados a Costa Rica por la AID. Como tendencia constante, desde 1983 hay una modificación fundamental de su estructura, al acrecentarse las donaciones: en 1987 fueron un 82% del total y en la proyección para el presente año un 97%. (Cuadro 5b)

### III. ALGUNAS TESIS SOBRE LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA CRISIS Y DE LA POLITICA ECONOMICA Y SOBRE LA ORIENTACION DE LA POLITICA SOCIAL

#### 1. El impacto en el nivel de vida de la población

Existe una relación entre el comportamiento de las variables macroeconómicas y el comportamiento de los ingresos. Sin embargo, los cambios en la magnitud de la pobreza no corresponden mecánicamente a aquellos de los indicadores macroeconómicos. En el nivel de vida en las dos últimas décadas, considerando ingreso, consumo, empleo y mortalidad infantil, se han distinguido claramente tres periodos (Trejos et al., 1988, pp. 54-61):

a) Expansión del nivel de vida (1970-1979): expansión de los indicadores de ingreso, particularmente de los salarios. Parece ser que los estratos altos fueron los más beneficiados. Hay resultados, como la mortalidad infantil, que muestran una reducción importante, y expresan un mejoramiento en las condiciones de vida de los grupos de menores ingresos. Hubo una leve caída o estancamiento en los años 1974 y 1975, particularmente en el último, relacionado con la crisis petrolera.

Estimaciones globales sobre la pobreza la sitúan en un 25% de las familias y en un 30% de las personas, y su aumento absoluto por el crecimiento de la población. El fenómeno de la pobreza se da como mayoritariamente rural; se muestra un aumento en la intensidad de la pobreza expresado en el aumento de la pobreza extrema y de los recursos para erradicarla. Respecto de la pobreza extrema se discuten eventuales sobreestimaciones.

b) Reducción marcada del nivel de vida (1980-1983): en tres o cuatro años, se retrocede una década o más en los indicadores del nivel de vida. El ingreso salarial cae más rápidamente que el ingreso familiar y éste más rápidamente que el consumo. El efecto del cambio, aunque con impactos particulares, tiene un sentido general para la población. El desempleo abierto aumenta en un primer momento más que el subempleo, que luego llega a equipararse. Se detiene la reducción sistemática de la tasa de mortalidad infantil, que se estanca alrededor de los veinte por mil.

En esta fase, el incremento de los grupos pobres se concentra en la pobreza básica mientras que la pobreza extrema muestra una reducción leve. El incremento de la pobreza parece concentrarse en grupos que se encontraban ligeramente por encima del umbral de pobreza, mayoritariamente urbanos; ello expresa su alta vulnerabilidad en coyunturas críticas. En 1983, un 40% de las familias pobres y un 38% de las personas pobres residían en zonas urbanas.

La distribución del ingreso según el coeficiente de Gini era de alrededor de 0.47, mientras que en 1971 fue de 0.44, grado de concentración moderado en relación con otros países latinoamericanos. El 10% de las familias más pobres percibían menos del 2% del ingreso total mientras que el 10% de las más ricas, el 37%. Más de la mitad del ingreso familiar total era apropiado por el 20% de las familias de mayores ingresos y cerca del 70% de las familias se ubican por debajo del ingreso familiar promedio, el cual ascendió a 14.066 colones mensuales. (Trejos y Elizalde, 1986, p.90)

En una comparación general tentativa de la distribución del ingreso entre 1971 y 1983 (Ib. .100-101), en ambos años la concentración tiende a aumentar en zonas urbanas, y para 1983 ello se acrecienta. Decrecen los sectores más pobres (primer 20%) y los medios (60% intermedio), a favor del 20% de mayores ingresos, sobre todo en el Área Metropolitana. Dentro del 20% de mayores ingresos, es interesante que ocurrió una separación o diferenciación entre el noveno y décimo decil a favor del último, sobre todo en las ciudades. En ese sentido, un incremento de alrededor del 18% de los ingresos ocurrido en escala nacional, sobre todo en las zonas rurales no significó un progreso distributivo, ya que la concentración de los ingresos aumentó en todo el país. (Ib, p.102-103)

c) Recuperación del nivel de vida (1984-1986), sin alcanzar aquel previo a la crisis: con excepción de la mortalidad infantil que continúa estancada, se revierte la tendencia al deterioro de los diversos indicadores, la mayoría de los cuales no alcanzan los niveles de 1977. La recuperación es más fuerte en los ingresos que en el consumo.

En este período se da una reducción en la magnitud absoluta, incidencia e intensidad de la pobreza, tanto por estratos como por zonas. La disminución mayor se da en la pobreza básica y en las zonas urbanas. La reducción en la intensidad, de un 50%, es mayor que la relativa a la incidencia, que es de un 26%. Es importante señalar que en 1986 los coeficientes de pobreza fueron más favorables que los años 1971, 1973 y 1977.

d) Por otra parte, en los años 1987 y 1988 al incrementarse la inflación y registrarse rezagos en la recuperación de los ingresos, hay nuevamente un decrecimiento del nivel de vida, lo cual marca un cuarto período.

## 2. Vigencia redistributiva de la política social del Estado en un período de crisis económica

Estudios del subsidio público en programas sociales (Trejos et. al., 1988, pp.173-196) para 1983 estiman el subsidio global en 19.912 millones de colones, equivalentes a un 16% del PIB de ese

año. Este subsidio, se dedicaba en un 39% a educación, en un 38% a salud, en un 9% a servicios de agua y depuración de aguas, en un 7% a vivienda, un 5% a alimentación y nutrición y un 2% a seguridad social.

De este subsidio público en programas sociales, una tercera parte beneficiaba a las familias pobres; dentro de ellas en un 53% a las de pobreza básica y en un 47% a las de pobreza extrema (Ib., p. 180).

En educación, estas familias perciben más de una cuarta parte del subsidio. Por otra parte, hay claras diferencias por estrato en relación con el acceso a la educación: los beneficiarios de la educación secundaria se concentran en sectores medios, mientras que 42% de los beneficiarios de la educación superior provienen de los dos deciles de familias adineradas, mientras que en primaria la situación es la opuesta. (Ib.)

En salud, 37% de los gastos son asignados a las familias pobres. Considerando la población calificada como tal, el subsidio promedio en salud por familia pobre es en más de un 50% mayor a aquel de los no pobres. (Ib.)

Alimentación y nutrición, y seguridad social, son subsidios orientados fundamentalmente a familias de bajos ingresos: dos terceras partes de estos gastos benefician a las familias pobres. (Ib.).

Por el contrario, vivienda, agua y depuración de aguas benefician básicamente a los sectores no pobres. Las familias pobres obtienen sólo un 11% del subsidio en vivienda y un 20% del subsidio en agua y depuración de aguas. En el caso de la pobreza extrema, el subsidio en vivienda es nulo y el otro sólo de un 9%. (Ib., p. 182)

El impacto redistributivo de estos programas es notable. Los pobres en términos relativos y absolutos son el grupo más favorecido. Considerando la globalidad del país, el subsidio incrementa el ingreso familiar global mensual en más de una cuarta parte. El ingreso familiar de los pobres se incrementa en 4.187 colones: esto representa un 86% del ingreso familiar obtenido por ellos, y un 18% del obtenido por los no pobres. (Ib, p. 184). En el caso de la pobreza extrema, el ingreso aumenta a más del doble. Regionalmente, el subsidio mensual a las familias urbanas (promedio 4.166 colones) es mayor al de las familias rurales (2993 colones), aunque en las áreas rurales los pobres reciben mayores beneficios que los no pobres. De allí que se concluye:

"Cuando el subsidio es considerado, la proporción global de familias en pobreza declina de un 26 por ciento a tan sólo un 10 por ciento. La reducción más fuerte tiene lugar en la pobreza extrema, cuyo nivel llega a ser de solo un 3 por ciento. Como

consecuencia, la composición de la pobreza global cambia: el 70 por ciento de la misma proviene de la pobreza básica (en lugar del 53% que era antes del subsidio) y el resto proviene de la pobreza extrema" (Ib., p.188)

Una vez incluido el subsidio, el ingreso global del país y el ingreso global urbano se incrementan en una cuarta parte, y en las zonas rurales en un treinta por ciento. Con excepción de las familias urbanas en pobreza básica, el subsidio conduce a niveles promedio superiores para todos. (Ib., p.190) El subsidio hace declinar la brecha de pobreza global por familia de 3332 colones a 2732 y la per cápita de 498 a 382 colones: la brecha global pasa de 439 millones a 137 millones, lo cual representa una reducción en más de dos terceras partes. (Ib., p. 192)

Estas consideraciones se refieren a una encuesta de hogares realizada en 1983. Debemos contemplar respecto de la situación posterior, el efecto de cierta contracción real del gasto público destinado a tales subsidios, como veremos adelante.

### 3. Modificaciones de la política social en un contexto de crisis económica

#### a) Disminución real del salario social

El contexto fiscal de los ochenta marcado por el alto servicio de la deuda, por la dependencia del financiamiento externo de organismos con sendas propuestas para sanear las finanzas públicas y por la precariedad del crecimiento económico acarreó recortes en las instituciones encargadas del salario social.

Es notoria para el periodo 1975-1985, la caída real del gasto público destinado a políticas sociales, sucedida a partir de 1981. Únicamente en trabajo y seguridad social se superaron en 1985 los niveles de 1980. (Cuadros 6 y 7)

Los diversos sectores son afectados en una forma particular. Entre 1975 y 1981 todos los sectores sociales mantienen una estabilidad relativa en la proporción de recursos asignada. Es a partir de 1981 cuando se aprecia una fuerte reducción; el sector más contraído es salud que pasa de captar un 26.4% del gasto en 1979, a un 17% en 1985. El sector vivienda, por su parte, se ve fuertemente contraído en 1982, cuando su participación desciende a un 1.5% del gasto público total, para recuperarse posteriormente logrando en 1985 superar el porcentaje de 1975, al captar un 2.4% del total de recursos disponibles. (Mideplan, 1987b, p.31)

Medido en relación con la población total del país -no por beneficiarios directos-, se revela una considerable reducción del gasto en sectores sociales, fundamentalmente en educación y salud. Todos los sectores muestran en 1985 una disminución real por debajo del nivel de 1975, con excepción de vivienda, donde se muestra un incremento del 9.5%. Salud es el sector más afectado, con una disminución del 29% en esos diez años. (Ib, p.34)

Si se considera el gasto en relación con el producto interno bruto, la caída del gasto se denota menos pronunciada. En 1985, alcanza un 42.1% del PIB, que en 1978 era de un 41% y en 1975 de un 35.6% (Mideplan, 1987 b, p.35, cuadro No.8). Considerando la capacidad productiva y la caída real del gasto social percibimos entonces que no ha habido un interés por dismantelar el Estado de bienestar, pero son notorias las constricciones fiscales. Por otra parte, la voluntad de contraer el gasto y racionalizar plazas en el sector público y sobre todo los efectos de la política salarial se han manifestado también claramente en este terreno: el gasto del gobierno central destinado a sueldos y salarios pagados a servicios sociales, de 1975 a 1985 se redujo de un 29.7% a un 14.3%. (Ib., p. 53)

Naturalmente el recorte del gasto ha incidido en la prestación de los servicios. Respecto del sector educación y recursos humanos, un diagnóstico gubernamental reciente destaca como problemas de orden financiero la sensible disminución de los recursos presupuestarios y sus repercusiones negativas en la contratación de personal, la eficiencia de los servicios y carencias de infraestructura (Secretaría Ejecutiva, 1987).

#### b) Racionalización de la política social y procesos de centralización en el seno del Estado

La magnitud de los recortes del gasto social, hechos ante la imposibilidad de dejar inalterada en la presente década la política social, como hemos visto no condujo a dismantelar el Estado de bienestar. En ello han jugado un papel importante las inercias institucionales, la voluntad política gubernamental de seguir impulsando una base material redistributiva vía Estado como forma de integración y de cooperación social, y la presencia institucionalizada de los sectores populares en el Estado y la sociedad civil (Sojo, 1986, p.43). De allí la eficacia estatal para "confiscar" conflictos sociales, nada fácil de construir en una época de transición hacia un nuevo modelo económico y hacia una redefinición del Estado (5).

Las presiones de los organismos financieros internacionales han sido fuertes en cuanto a racionalizar el gasto público, lo cual naturalmente incide en las políticas sociales. Expresión de esto fue la Ley de equilibrio financiero del sector público y los términos negociados con el Banco Mundial en el PAE II. Por otra parte, las diversas instituciones han mostrado una serie de

deficiencias que ponen sobre el tapete propuestas de reorientación, las cuales pueden darse desde ópticas muy diversas. Ello impide mirar el proceso de racionalización en una forma unívoca o las instituciones como heterónomas.

El gradualismo que señalamos respecto de la transformación de la estructura económica se denota también en la política social. En las dos últimas administraciones, la estabilización financiera preconizada para enfrentar el déficit de las instituciones de bienestar y de seguridad social se dió fundamentalmente mediante una racionalización del gasto que privilegió la reforma administrativa, la generación de ingresos y la reestructuración de los servicios (Rivera y Wendell, 1988a, pp.18 y 19).

Una de las tendencias modificadoras del Estado social se ha expresado en un creciente papel del Poder Ejecutivo en los procesos de toma de decisiones, y en un relativo debilitamiento de la influencia de la Asamblea Legislativa (Ib., p.21). Desde el Ejecutivo se han impulsado, mediante su intervención directa en las instituciones, reformas administrativas en la producción y prestación de servicios públicos; tal fue el caso en el Banco Popular, JAPDEVA, ICAA, INVU, IDA, FECOSA, Editorial Costa Rica, algunos de ellos directamente relacionados con políticas sociales muy variadas: desde el crédito hasta servicios de agua potable y políticas de vivienda y de desarrollo agrario.

A diferencia de la CCSS que, como veremos, logró en forma autónoma impulsar una estrategia de reestructuración, estas instituciones se mostraron incapaces de hacerlo. Entre los procedimientos comunes a las intervenciones se señalan: 1) creación de comisiones de "notables" nombrados ad hoc por el Ejecutivo; 2) revisión de las estrategias, métodos y procedimientos de las instituciones; 3) elaboración de un plan de reestructuración administrativa; 4) creación de mecanismos y controles administrativos, y de instancias técnicas para impulsar los nuevos lineamientos (Ib, punto 3.2.1).

Entre la gama de motivos que fundamentaron las intervenciones se destacan: deficiencias en la prestación de los servicios; descontento por parte de los usuarios; presuntas irregularidades administrativas; fallas en aspectos financieros; necesidad de reestructurar procedimientos organizativos; cargos de corrupción. (Ib.)

Por lo demás, es necesario subrayar que los procesos de centralización de toma de decisiones en el Estado costarricense no son nuevos. Luego de la descentralización iniciada en 1948 con el desarrollo de las instituciones autónomas y semiautónomas y que se extendió hasta los años sesenta, la siguiente década mostró un camino inverso, inaugurado por la uniformación de las juntas directivas de estas instituciones en 1970 que reguló la presencia del Ejecutivo y consolidado en 1974 con las presidencias ejecutivas, cuando el Consejo de Gobierno comenzó a

designar al funcionario de mayor rango en estas instituciones. Para efectos del desarrollo de funciones empresariales del Estado mediante CODESA, ello mostró ser sumamente importante (Sojo, 1981).

En la década del ochenta, los procesos de centralización se han dado fundamentalmente mediante una concentración de las decisiones respecto del gasto público, con la Autoridad Presupuestaria y el expediente de caja única. En otros casos, desde el Ejecutivo se plantearon modificaciones presupuestarias aprobadas por la Asamblea Legislativa, como la creación del Fondo de subsidios para vivienda con la ley No. 7052, que destinó a este propósito un 33% de los Fondos de desarrollo social y asignaciones familiares.

Ello ha modificado, en el caso de las instituciones relacionadas con el salario social, la representación de intereses de los sectores populares, cuyas demandas parcialmente podían canalizarse como antes hacia la institución, pero en otros casos necesariamente ante otras instancias involucradas, como el Ministerio de Hacienda o la Asamblea Legislativa, en la medida que transferencias obligatorias afectaban los servicios (Sojo, 1984a, p.157).

### c) Nuevas relaciones con el usuario y privatización

Hasta el inicio de la presente década el salario social era provisto casi monopólicamente por instituciones públicas. Recientemente, modificaciones de la prestación de servicios han dado importancia a la participación de la comunidad y de organizaciones populares, como las cooperativas y las asociaciones solidaristas (Rivera y Wendell, 1988a, punto 3.2.1.)

Se ha planteado en ese sentido la transferencia de algunos servicios a pequeñas empresas; ello hasta ahora ha tenido un mínimo impacto (por ej. el servicio de recibos telefónicos). Algunos análisis muestran escepticismo respecto del potencial beneficio económico y del servicio resultantes de la privatización cuando la capacidad privada empresarial es incierta, y destacan algo crucial que llama a la reflexión: si los potenciales empresarios no tienen la capacidad empresarial requerida, la política de privatización puede conducir a una crisis de servicios (Sanguinetti, p. 205).

En el caso de la vivienda se impulsó la participación de los propios integrantes de los frentes de vivienda, con quienes se llegó a un acuerdo político basado en nuevos programas de vivienda; se estima que más de 300 grupos organizados se encuentran actualmente participando en proyectos de vivienda. Del total de créditos del BAHNVI, ente rector del sector, casi el 40% se han canalizado a través de cooperativas. (Memoria 87-88



Ministerio de vivienda ) .En el caso de la salud, la creación de cooperativas de salud, a las cuales la CCSS subcontrataría para administrar clínicas y hospitales (Rivera y Büendell, op. cit.) .

También se ha planteado como posibilidad el desarrollo de la autogestión en manos de la comunidad, por ejemplo, en la administración de los comedores escolares (Ib.). Tal propuesta, en aras de la eficiencia, requiere también estimar la capacidad empresarial comunitaria.

#### d) Focalización de esfuerzos y conflictividad social

En los años setenta prevaleció una concepción universalista de la política social y se iniciaron algunas políticas, como la del INAB, destinadas fundamentalmente a los sectores de menores recursos. Con el impacto de la crisis, durante el gobierno de Monge se hizo un esfuerzo focalizado con el Plan de compensación social, el cual incluyó aspectos de empleo, vivienda, nutrición, y reforzó las actividades normales de las instituciones públicas que atendían previamente a esos sectores (Rodríguez, 1988, p.104).

Algunos análisis muestran la necesidad de focalizar el subsidio que las políticas públicas representan para los sectores más empobrecidos de la población. Recientemente se ha evaluado, considerando una erradicación mínima de la pobreza, que ésta sería factible transfiriendo un 3% del ingreso de todas las familias, mostrando el problema como una redistribución de ingresos y no como de disponibilidad de recursos (Trejos et.al., 1988, p. 198).

Se recomienda redefinir los programas sociales para aumentar su eficiencia redistributiva global, crear programas de ayuda y de emergencia y lograr un uso más eficiente de los recursos (Ib., 211). La evaluación de la eficiencia distributiva directa de los programas sociales se estima en cerca de un tercio, mayor en la zona rural donde alcanza un 45%. En todas las zonas, dos quintas partes de ese monto se traducen en un subsidio excesivo: con redistribuir dos terceras partes de este exceso se calcula que se podría eliminar totalmente la pobreza (Ib., p.209). Si el énfasis se pone en la pobreza absoluta, los esfuerzos deben encaminarse hacia grupos objetivos en las zonas rurales; si se pone en la pobreza relativa, el énfasis debe ser igual en las zonas rural y urbana o incluso mayor en la urbana, particularmente en el área metropolitana. (Ib., p.40)

La crisis hizo evidentes ciertas necesidades no atendidas adecuadamente. Como vimos anteriormente, en el caso de la vivienda, el Estado no había beneficiado mayormente a la población pobre del país, desprovista de la capacidad de pago requerida (Valverde, 1986). Ello dio pie desde finales de la década del setenta a la formación de beligerantes frentes de

lucha por vivienda. El gobierno de Oscar Arias logró un acuerdo impulsando un nuevo plan de vivienda y los frentes depusieron la ocupación de tierras como forma convencional de lucha. Sin lugar a dudas la innovación fundamental del gobierno en el plano de la política social, ha consistido en dar prioridad a la solución del problema de la vivienda.

Según datos oficiales, la demanda potencial de vivienda clasificada de acuerdo con su capacidad de pago se desagregaba así: un 21% de familias sin capacidad de pago; un 40% de familias con capacidad de pago mediante soluciones mínimas especiales y un 22% con capacidad mediante soluciones populares o económicas. Ello implicaba un esfuerzo de financiamiento para que un 61% de la población pudiese adquirir una vivienda. (Ministerio de vivienda, 1988b). El énfasis puesto en este tipo de soluciones denota la focalización en materia de vivienda, rasgo innovador de política social más sobresaliente del periodo, cuyas peculiaridades abordaremos más adelante.

#### e) Políticas específicas por sector para enfrentar la crisis fiscal

Hemos observado las tendencias generales en la caída del gasto, al igual que la vigencia del Estado redistributivo a pesar de las restricciones enfrentadas. Los diversos sectores y las instituciones públicas involucradas en cada uno de ellos han enfrentado esta situación mediante políticas particulares. Destacaremos en esta oportunidad dos de ellas. La de salud, por tratarse del sector social que más recursos ha captado tradicionalmente y hasta nuestros días. La de vivienda, por haber sido el sector menos desarrollado y con un impacto redistributivo más restringido, y donde se realizó el proceso de reorganización más radical.

##### i) La política de salud

La disminución del gasto en salud fue notable. Para los años 1981 y 1982, el gasto per cápita en salud calculado en relación con el PIB experimenta respectivamente un decrecimiento del 28.8% y del 35.5%, para luego recuperarse levemente sin alcanzar los niveles anteriores (Sanguinety, 1988, p. 53). Correlaciones de los índices de variaciones anuales del PIB y del gasto en salud muestran que el gasto en salud fluctúa sistemáticamente con mayor amplitud que el PIB: cuando hay una expansión de éste, el gasto en salud se expande a una tasa mayor, mientras que en periodos de contracción también su reducción es más pronunciada.

Es necesario considerar que la Caja Costarricense de Seguro Social enfrentaba a inicios de la década un considerable déficit de operación, relacionado con: la universalización de sus servicios a partir de 1973; el traspaso de los hospitales y

clínicas que habían estado en manos de la Junta de Protección Social en 1979 y la deuda contraída por el Estado en su calidad de patrón que venía acumulándose, hasta alcanzar en 1983 la suma de 2.027 millones de colones. (Gwendall, 1988)

La incidencia de la disminución del gasto en los servicios no ha sido particularmente estudiada; el Colegio de médicos y cirujanos por su parte ha tipificado algunas de las deficiencias (Ib.). Se reconoce en la actualidad un "virtual deterioro en la calidad de la prestación" de los servicios de salud, cuya evidencia fundamental se ha dado en el área de atención primaria (salud rural y comunitaria, dental, alimentación y nutrición) y en la morbilidad de la población con enfermedades que habían experimentado un descenso notable (Mideplan, 1988, pp. 46-47).

Es sin embargo unilateral hacer proyecciones respecto de la prestación de los servicios únicamente a partir del gasto, cuya reducción no indica una necesaria reducción total efectiva de los recursos disponibles. En el caso de la CCSS, cuyo volumen de gasto es predominante en el sector, se tomaron en medio de la crisis severas medidas para aumentar su eficiencia interna mediante una reducción de los costos hospitalarios y por consulta externa. La disminución real de los gastos de la CCSS entre 1980 y 1982 fue del 50%; en el caso del Ministerio de Salud de un 49%. En 1985, el gasto total de la CCSS era menor en un 24% que en 1979. Por otra parte, es interesante señalar que la recuperación del gasto iniciada en la CCSS en 1983 se hizo aumentando significativamente las recaudaciones: la cuota patronal pasó en 1983 de un 6.75% a un 9.25% de los salarios. (Sanguinetti, p.49).

En relación con las constricciones presupuestarias en el sector salud se hace necesaria una distinción. El Ministerio de Salud y otras instituciones dependientes del presupuesto del Estado sufrieron sustanciales reducciones. La CCSS por su parte, debido a su financiamiento autónomo logró consolidar su base financiera. Es así como los ingresos del seguro de enfermedad y maternidad han venido aumentando sistemáticamente desde 1983. Desde ese año hasta 1986 se dan tasas anuales de crecimiento del orden de 35, 18, 14 y 6% respectivamente. Por la política de gasto se ha presentado superávit: de 11.090 millones de colones recaudados en 1985, se gastaron en servicios propios 9.206 millones; en 1986 los ingresos ascendieron a 12.840 millones y los egresos a 10.955 millones. Por esta razón, la CCSS ha venido realizando transferencias crecientes al Ministerio de Salud (Ib., pp. 49 y 79). En relación con la deuda del Estado, esta no ha sido enjugada; en 1986 ascendía a 4.100 millones (Gwendall, 1988). Algunas medidas de contención del empleo contenidas en la Ley de equilibrio financiero, luego de protestas, fueron flexibilizadas con la intervención de la Asamblea Legislativa. (Ib.)

La actual situación de la CCSS debe ser relacionada también con las orientaciones políticas que han llegado a prevalecer. Durante el gobierno de Carazo fracasó la tentativa de los médicos de privatizar la salud mediante la libre elección médica hospitalaria. A partir del gobierno de Monge, la tesis que se impone tampoco es favorable a una indiscriminada privatización, sino a la necesidad de introducir medidas de racionalización del gasto y de la prestación de los servicios (Ib.) conjugada con el traspaso de servicios a cooperativas.

#### 11) Innovaciones en política de vivienda

Durante el gobierno de Carazo se planteó la necesidad de realizar una reestructuración del sector vivienda y poner un énfasis en soluciones habitacionales para sectores de bajos ingresos; ello sin embargo no se puso en práctica por desacuerdos en el propio gobierno y más aún, en medio de la crisis fiscal, importantes recursos destinados al sector se utilizaron para otros fines (Valverde, 1986).

Las restricciones del gasto afectaron enormemente al sector; se registraron en esta década los más bajos índices en soluciones de vivienda de los últimos treinta años. Así, de 1989 soluciones realizadas por el INVU en el año 1978, se pasó en el año 1982 a 52 soluciones -cifra sólo comparable con la del primer año de desarrollo del INVU-, y en el año 1983 a 255. Todas las instituciones públicas financiadoras de vivienda muestran una radical contracción crediticia a partir de 1980 (Ib., punto 2.3.).

El impacto social de esta contracción del sector es aún más claro, si consideramos la acumulación del déficit en vivienda. Para 1983, según cifras oficiales, su magnitud afectaba a 270 mil familias, equivalentes al 61,7% de la población total (Ib., p.97). Ello guarda estrecha relación con el perfil tradicional de la política de vivienda del país, su monto y su impacto redistributivo. Para 1982, se calculó el subsidio total en vivienda ascendió a un 1.05% del PIB; de éste, un 96.2% correspondía al subsidio en créditos y un 3.8% a subsidios directos. La distribución de éstos últimos es muy progresiva, mientras que la crediticia es regresiva, ya que el 10% de las familias más pobres del país estaban totalmente excluidas del subsidio, el cual además estaba concentrado en la zona urbana. En tanto, el impacto redistributivo global del subsidio era muy reducido, a diferencia del canalizado en educación y salud. (Rodríguez, 1986, pp.76-78)

Desde finales de la década de los ochenta el déficit de vivienda y el carácter regresivo de las políticas provocan una gran movilización social, en frentes de lucha por vivienda. Las reformas en materia de política de vivienda introducidas durante el gobierno de Oscar Arias hicieron posible un acuerdo

con estos frentes, y muestran sin lugar a dudas una sensibilización estatal ante una demanda largamente insatisfecha. Debido al contexto fiscal y al avance de ciertas perspectivas proclives a reducir subsidios y en general del papel del Estado, según sus forjadores estas medidas tienen un carácter profundamente innovador y constituyen una clara contratendencia (Vargas, p.2). Ello es comprensible en tanto efectivamente el problema de la vivienda se llegó a percibir como problema nacional de alta prioridad, sujeto a "una razón política" que imponía "ofrecer resultados poco menos que espectaculares en un corto plazo" (Ib.)

No se trata en este caso de elevar simplemente los recursos que venían siendo destinados a vivienda para solventar los problemas: se diseñó e implantó por el contrario una radical reestructuración del sector vivienda. Se creó a finales de 1986 el Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, con el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) como ente rector y se crearon dos fondos especiales: el Fondo nacional para vivienda (FONAVI) para crear recursos permanentes y del menor costo posible; el Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) para las familias de escasos ingresos. Este último se plantea una meta muy compleja: "...el imperativo es la constitución y funcionamiento de un eficiente sistema de subsidios para la vivienda, que sea capaz de cumplir con la meta de disolver paulatinamente el grave problema de vivienda, sin distorsionar el normal funcionamiento del mercado financiero de vivienda y con una adecuada atención de la población realmente necesitada." (Ib., p.3)

El financiamiento establecido por ley para el FOSUVI representó una reasignación fuente de recursos públicos: parcialmente de recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el cual le debe destinar un 33% de sus recursos anuales, más el 3% del Presupuesto Nacional de la República y de los presupuestos extraordinarios y a las donaciones. El FOSUVI no está concebido como un fondo de emergencia o de contingencia sino que tiene un carácter permanente; el bono familiar de vivienda es un crédito individual a largo plazo que pretende ampliar la capacidad de pago de los demandantes de una vivienda por encima del ingreso familiar. Actualmente califican como tales familias con ingresos iguales o menores a cuatro veces el salario mínimo de un obrero especializado de la construcción (Ib., p. 2).

En la reestructuración del sector se destacan dos rasgos: el eje se constituye en torno a un nuevo sistema financiero nacional, rector de los recursos, encabezado por una entidad que centraliza o coordina los recursos. Por otra parte, el Estado se retrae de la actividad de construcción. (Rivera y Gündell, 1988, p.23)

De mayo de 1986 a setiembre de 1988 fueron construidas en el país un total de 46.462 viviendas (cifras de Ministerio de la vivienda). La focalización del esfuerzo es notoria: en relación

con 1986 se produjo en el segundo semestre de 1987 un crecimiento de la construcción en metros cuadrados del 35.35%; en el caso de la construcción orientada a la llamada vivienda de interés social, la cual es menor de 70 metros cuadrados, el aumento fue de un 84% (Ministerio de vivienda, 1988,p.43). A mayo de 1988, el FOBUVI había emitido 4935 bonos familiares. (Ib., p.16) De mayo de 1986 a abril de 1988, el Benhvi había financiado un 21% de un total de 26.460 operaciones de vivienda ; en su caso el ingreso promedio de los beneficiarios ascendía a 12.845 colones indicando el carácter social del programa (Ib., pp. 17 y 18).

#### IV. EL ESPECTRO DE OPCIONES DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO EN LOS PROXIMOS AÑOS

Las tendencias en política económica y social delineadas constituyen el punto de partida para la reflexión sobre los caminos del futuro próximo. En los últimos años se han profundizado las inequidades sociales en Costa Rica; sin embargo, el Estado costarricense ha pretendido en cierta medida buscar soluciones a la crisis atendiendo también el interés de las mayorías. La dinámica del desarrollo social previa al desencadenamiento de la crisis operó incluso como un importante muro de contención de sus repercusiones. En ese sentido es justo afirmar que en Costa Rica, por haberse contado con experiencia en el diseño y manejo de programas sociales, se pudieron tomar algunas acciones eficaces para responder al deterioro social (Pinto de la Piedra, p.3). (6)

Como futuras opciones socioeconómicas se pueden observar o prever tres líneas de fuerza fundamentales, y si bien existen constricciones cruciales de orden económico como el problema de la deuda externa, el signo del desarrollo futuro depende también en gran medida de los esfuerzos y voluntades políticas que operen en uno o en otro sentido.

- 1) Por una parte, mediante cambios radicales, el propiciar una salida conservadora de la crisis
- 2) El estancamiento y entrada en crisis de las soluciones que han prevalecido hasta hoy día, de no atenderse y superarse aquellos aspectos vulnerables en una perspectiva de mediano y largo plazo
- 3) La implantación de una recuperación del desarrollo económico con equidad, si estos aspectos pueden ser superados y se logran propuestas innovadoras

La opción conservadora (7) se deriva fundamentalmente de un diagnóstico de la crisis económica que propone restablecer la competencia internacional de acuerdo con las ventajas comparativas resultantes de una liberalización total de la economía en diversos aspectos (comercial, cambiario, financiero, tarifario). Ello se propone en el marco de un modelo esencialmente estático, tanto de la asignación de recursos en la estructura productiva interna como de las ventajas comparativas en el comercio internacional. Sus implicaciones para la política social son claras, ya que se propone una remuneración deseable de los factores que elimine subsidios e impuestos al capital o al trabajo; las fuerzas políticas se perciben como eventuales fuentes de distorsión de la formación de los precios.

La implantación de esta óptica conservadora tendría que ir acompañada de cambios radicales en el sistema político costarricense, porque representaría un giro radical en la representación de intereses sociales, tanto en el Estado como en

la sociedad civil, a favor de un corporatismo empresarial. Su viabilidad está ligada por ello a un debilitamiento sustancial de las fuerzas políticas que han marcado hasta hoy un tratamiento consensual de lo económico y lo social.

Por otra parte, la línea de fuerza que ha prevalecido hasta hoy día reúne ciertos aspectos que la convierten en vulnerable - de no introducirse modificaciones- para constituir la base de un desarrollo económico basado en la productividad de los recursos nacionales y con una vocación de equidad social.

### 1. Opciones en el campo económico

En el plano económico, cabe destacar el carácter indiscriminado de la promoción de exportaciones. Ello es sintomático: expresa la ausencia de criterios fundamentales que podrían constituir la base de una estrategia de desarrollo socioeconómico que supere los impasses de la actualidad. Entre estos criterios se deberían contar: selección del tipo de exportaciones de acuerdo con su inserción sectorial; su articulación vertical y horizontal con otras actividades internas; su contribución potencial a los aumentos de productividad (Garnier 1984).

En ese sentido, predomina también una experimentación excesiva que puede acarrear altos costos sociales y económicos: la información está dispersa, existen grandes áreas de ignorancia y falta de experiencia sobre producción y mercadeo, lo cual denota problemas en la política estatal y en la capacidad empresarial. (Herrero y Salazar, 1987, p.18)

Ya hicimos referencia al carácter crecientemente regresivo de la estructura tributaria. A ello ha contribuido notablemente la promoción a las exportaciones no tradicionales, de elevados costos fiscales. El gasto de los CATS se incrementó paulatinamente en el periodo 1973-1983 y creció más aceleradamente en los siguientes años: en 1987 alcanzó la cifra de US \$ 32.2 millones, lo cual representó un 3.7% del presupuesto del gobierno central. Como debilidades de este instrumento se han señalado su difícil viabilidad fiscal a mediano plazo y la incertidumbre respecto de su eficacia para promover exportaciones en sectores específicos. (Salazar et. al., 1988, pp.35-39) En cuanto a exoneraciones de importaciones, de aquellas que en principio están sujetas al pago de derechos, en 1986 ascendió a la suma de 2637 millones de colones para un valor importado de 33.158 millones de colones. En importaciones no sujetas a derechos arancelarios, en 1986 y 1987 se exoneraron respectivamente 6113 y 7545 millones de colones (Ib., p. 37).

Estos beneficios fiscales muestran una preocupante concentración, ajena a una estrategia de transformación del modelo económico que considere la equidad y la democracia económica como uno de sus cometidos. Un número reducido de empresas exportadoras concentran los beneficios: de las



exportaciones de frutas, cerca del 85% están en manos de una sola empresa; las exportaciones de flores en 1986 fueron realizadas por setenta y nueve empresas, nueve de las cuales reunían el 78% del valor exportado; en plantas ornamentales, ocho de noventa y dos empresas exportaban más del 60% del total. Por su parte, las empresas industriales acogidas al Contrato de exportación cuentan en promedio con más de 100 empleados; empresas de estas características representan sólo un 5.4% de aquellas 4772 registradas en el Banco Central (Rodríguez et. al. 1988a, pp. 17 y 18)

A ello se suma la ausencia de intentos que denoten una política deliberada de cambio estructural hacia un desarrollo integral; tal política debería contemplar una combinación de la reactivación sostenida de la demanda interna con una profundización selectiva del proceso de sustitución de importaciones y con una rehabilitación del aparato productivo para la exportación no tradicional. (Garnier et. al., p.6) (8)

Están ausentes también acciones vigorosas en relación con el fortalecimiento del Mercado Común Centroamericano, aún cuando el énfasis exportador esté fuera del área. En este sentido, en Costa Rica al igual que en los otros países del MCC no se ha ampliado "la visión tradicional del ajuste estructural explicando como la integración puede contribuir a aumentar la eficiencia de la sustitución de importaciones y, en general, el proceso de reconversión industrial" (Fuentes, 1988, p.22) Tampoco se ha intentado insertar en una "estrategia regional de desarrollo amplia y flexible las diversas políticas que los países aplican con grados diversos de intensidad" (Ib., p.5). No se considera que el desarrollo científico y tecnológico inherente al impulso de la productividad de los recursos humanos y naturales se hace de hecho más viable en escala regional que a partir de un país pequeño como es Costa Rica. (Garnier et.al., p.9) . Por el contrario, se hace necesario pensar "en un ajuste no solo compatible con la integración, sino más bien facilitado por la generación de una interdependencia mutuamente beneficiosa." (Fuentes, 1988, p.5)

Los resultados del ajuste estructural apenas se vislumbran y de hecho se puede calificar el momento actual claramente como la transición hacia una apertura al mercado internacional. Para que redunde en una elevación de la productividad del país y en un desarrollo social en pro de la equidad se requieren una serie de esfuerzos, relacionados todos con ellos con enfrentar los aspectos vulnerables arriba mencionados. No atenderlos puede conducir a la profundización de los problemas de la balanza comercial, a la quiebra de empresas, al deterioro del nivel de vida de los pequeños productores sin que existan vías de reinserción laboral, y en general al desempleo, sin que se propicie una reorientación clara de recursos.

## 2. Opciones en la política social

En el campo de la política social, los retos son enormes. Se han hecho evidentes los límites de la reducción del gasto social para contribuir a la estabilidad económica. En un corto plazo no se vislumbran cambios en los ingresos del Estado, a menos que ocurra un giro radical en relación con el endeudamiento externo, o que se altere el carácter crecientemente regresivo de la estructura fiscal. La reestructuración de las instituciones de bienestar, promotora de un rendimiento óptimo de los servicios, se hace importante y necesaria por sí misma, pero está en ese sentido además asociada, como alternativa, con la imposibilidad de recurrir a reducciones del gasto sin alterar la prestación de los servicios y con las eventuales dificultades políticas acarreadas por las modificaciones fiscales recién señaladas.

La transición en el modelo económico y la apertura económica traerán inevitablemente secuelas en el empleo, lo cual en el corto plazo representará una gran presión ante el Estado si existe la voluntad de proteger a los más débiles en aras de la equidad en este proceso de transición (por ej. con programas de empleo de emergencia). La restricción del gasto frente a una ampliación de los servicios por fenómenos propios del período crearán nuevas tensiones.

La transferencia de servicios y el compartir la creación de servicios con sujetos no estatales pueden ser convenientes e incluso pueden contribuir a un proceso de democratización, siempre y cuando se garantice que no vayan en detrimento de la calidad del servicio y que no representen una elevación de sus costos. En ese sentido, de darse tales transformaciones, el sector público tendría que seguir cumpliendo con una función reguladora, fiscalizadora, evaluadora y proveedora de recursos (Bustelo, p.24).

Una tensión que seguirá presente es aquella entre la universalidad de la política social y los esfuerzos de focalización. Poner el énfasis únicamente en el último aspecto, puede hechar por la borda una serie de conquistas sociales logradas hasta la fecha. Además puede acarrear graves consecuencias políticas, de saturarse en su disposición "al sacrificio" sectores sociales, como las capas medias, que se han visto muy afectadas en su nivel de vida y cuyos recursos amortiguadores del embate de la crisis se han visto notablemente menguados.

Las restricciones financieras y la búsqueda de equidad plantean como aspecto fundamental la necesidad de poner un énfasis en la producción y en la propiedad de los recursos (Herrero y Salazar, 1987, p.5) teniendo como meta la democracia económica. La experiencia cooperativista en Costa Rica (por ejemplo, en la producción del café) ha dado algunos resultados positivos que merecen ser profundizados y complementados. Ello sin duda requerirá un esfuerzo político muy importante, debido a

las reticencias existentes en la sociedad costarricense, mostradas por ejemplo en la imposibilidad de impulsar el Sector de Economía Laboral; un progreso en ese sentido puede darse con la venta de empresas de CODESA, como CATSA (venta ya en proceso), Cementos del Pacífico y FERTICA, en términos que puedan contribuir a democratizar la propiedad. La estrategia de transformación de la economía debe incorporar en ese sentido planteamientos promotores de diversos esquemas asociativos eficientes, mediante los cuales se incremente la democracia económica y se compartan los beneficios del ajuste.

El endeudamiento requiere una solución urgente para poder enfrentar todos estos retos: se hace necesario más que nunca utilizar los recursos nacionales en el consumo y en la inversión internos, sobre todo en un país pequeño vulnerable a los embates del comercio exterior.

## NOTAS

- 1) Aten iéndonos únicamente a delinear las orientaciones de las políticas no trataremos en particular los procesos de negociación con los organismos financieros internacionales, sus propuestas y su grado de influencia en la toma de decisiones y en la configuración de las políticas, tan profundo vía condicionalidad cruzada.
- 2) Como productos tradicionales se comprenden el café, el banano, el cacao, la carne, y el azúcar
- 3) Se afirma que en 1980 la sobrevaluación del colón era de un 44%, y que en 1982 había disminuido ya a un 6.7%, y que con la política de minidevaluaciones sucesivas no se presenta ya una sobrevaluación. Utilizando como base el año 1982 existe en 1986 una devaluación del 12% en beneficio del sector exportador. Ver Salazar et. al. (1988, p. 30. Esta última estimación deja en entredicho la tesis de que la política cambiaria no haya jugado un papel activo en la promoción de exportaciones.
- 4) Según Pinto de la Piedra, 1988, pp.32-33:  
"Durante el bienio 1981-82, el salario real promedio disminuyó en 29.3%. A partir de 1983, se aprecia una permanente mejora que, sin embargo, no alcanza a compensar la fuerte merma de comienzos de la década. Las remuneraciones medias en 1986 son equivalentes al 97% del nivel alcanzado en 1980. El salario mínimo ha tenido un comportamiento distinto. En 1982, llegó a su nivel real más bajo siendo equivalente a 85.9% del de 1980. En 1984, fue levemente superior al de 1980 para continuar una mejora que hace que en 1987 el salario mínimo real sea 20.3% superior al de 1980"  
Ver también Villasuso y Trejos, 1982.
- 5) Este tenor difiere de las propuestas neoliberales de inicio de la década, que proponían por ejemplo, eliminar "los múltiples impuestos sobre las planillas" (Rodríguez, 1980,p.9).
- 6) A partir de estas consideraciones válidas para algunos países se ha fundamentado" la conveniencia y necesidad de que los países de la región desarrollen políticas que, respondiendo con prisa a situaciones de deterioro transitorio, permitan atender el desarrollo social en una perspectiva de largo plazo." Pinto de la Piedra, 1988, p. 3.
- 7) La caracterización de esta propuesta para Costa Rica ha sido tipificada por Garnier,1984; Garnier et.al.,1985;Herrero y Rodríguez, 1987a. Nos basamos, por tanto, en este punto en esos trabajos. En cuanto a formulación de alternativas, ellas también han sido objetos de reflexión en esos textos y en Herrero y Salazar,1987.

- 8) Véanse algunas propuestas en ese sentido en Rodríguez, 1988, pp.34-47 y Rodríguez 1988a, pp. 52-58.

## BIBLIOGRAFIA

Manuel Argüello y Allan Lavell (1988) Estado y empleo en Costa Rica 1950-1986, Seminario OIT El empleo en el Estado en América Latina, Brasilia, junio

Banco Hipotecario de la vivienda/ Fondo de subsidios para vivienda (1988), Política de subsidios habitacionales en Costa Rica: definiciones y estrategia, abril

Banco Hipotecario de la vivienda/ Fondo de subsidios para vivienda (1988a), La garantía de elegibilidad al bono familiar de vivienda, conceptualización y estrategia, agosto

Banco Hipotecario de la vivienda /Dirección de crédito individual y fondo de subsidio para la vivienda (1988), Un modelo de previsión y definición de políticas globales de largo plazo del Fondo de subsidios para la vivienda, San José, setiembre

Eduardo Bustelo (1988) Política social en un contexto de crisis: ¿será que se puede?, Seminario de alto nivel sobre la recuperación del progreso social en América Latina IDE/ILPES/UNICEF, Santiago, junio

Banco Central de Costa Rica, Oficina de la deuda externa, diversas estadísticas sobre deuda

Cámara de industrias de Costa Rica (1985) Bases para una reactivación económica y social, enero

Mario Alberto Carrillo (1988), Las formas de financiamiento estatal en el desarrollo económico de Costa Rica, Documentos de trabajo IICE No. 117, San José, abril

Carlos Manuel Castillo (1986) , La crisis internacional de la deuda: la experiencia de Costa Rica, en French-Davis y Feinberg, Más allá de la crisis de la deuda, CIEPLAN-Diálogo Interamericano, Santiago

Charpentier, Silvia (1987) ponencia a Seminario CEMLA-Maestría en política económica UNA sobre Deuda externa y programas de ajuste, San José

CENAP et. al. (1988), Lucha campesina en Costa Rica: no hay pan sin alimentos. Los pequeños agricultores por el derecho a producir, San José

CEPAL (1985), Políticas de ajuste y renegociación de la deuda externa en América Latina, en Andrés Bianchi (compilador), La deuda externa latinoamericana, Grupo editor latinoamericano Programa RIAL, Argentina

CEPAL (1986), Crisis económica y políticas de ajuste, estabilización y crecimiento, México, abril

CEPAL (1986a), El desarrollo de América Latina y el Caribe: escollos, requisitos y opciones, LC/G.1440 (Conf. 79/3), noviembre

CEPAL (1986b), Desarrollo, transformación y equidad: la superación de la pobreza, LC/G.1448 (Conf. 79/4), diciembre

CEPAL (1987), Restricciones al desarrollo sostenido en América Latina y el Caribe y requisitos para su superación, LC/G.1448 (SES.22/3)/Rev. 1, febrero

CEPAL (1987a), Desarrollo equitativo. Algunas sugerencias para la acción, LC/r.628, diciembre

Lionel Demery y Tony Addison (1987), The Alleviation of Poverty Under Structural Adjustment, The World Bank, Washington, noviembre

Juan Alberto Fuentes (1987), La integración económica centroamericana. Nuevas perspectivas a partir de la turbulencia, Polémica No. 1- segunda época, San José

Juan Alberto Fuentes (1988), ¿Hacia un ajuste estructural con integración en Centroamérica?, ponencia al VIII Congreso centroamericano de Sociología, Guatemala, octubre

Juan Alberto Fuentes (1988a), Las exportaciones no tradicionales, San José, mimeo en prensa

Juan Alberto Fuentes (1988b), La erosión y desviación del comercio centroamericano, mimeo en prensa, San José

Leonardo Garnier (1984), Industria, Estado y Desarrollo en Costa Rica: perspectivas y propuestas, Estudios sociales centroamericanos No. 37, enero-abril

Leonardo Garnier, Edgar Fürst y Eugenio Rivera (1985), Elecciones 86: el programa económico de los partidos políticos y elementos para una propuesta alternativa, separata Aportes No.26-27, setiembre-diciembre

Leonardo Garnier (1987), Crisis, desarrollo y democracia en Costa Rica, en CEPAS-DEI, Costa Rica. Crisis y desafíos, San José, 1987

Ludwig Gündell González (1987), La política social y la asignación familiar en Costa Rica: 1973-1976, mimeo.

Ludwig Gündell (1988), Crisis y estabilización financiera en el Seguro Social de Costa Rica, mimeo, San José

Fernando Herrero y José Ml. Salazar (1987), El papel del Estado ante los nuevos retos del desarrollo, PLN de Costa Rica, CEDAL y FES, Seminario internacional A-7

Fernando Herrero y Ennio Rodríguez (1987a), La construcción del futuro a partir de la crisis, Alternativas de desarrollo, cuaderno No. 1

Fernando Herrero (1987b), Planificación y ajuste estructural, mimeo

Eduardo Lizano y Silvia Charpentier (1987) La condicionalidad cruzada y la deuda externa, en BCIE, Deuda externa: el caso de los países pequeños latinoamericanos, San José

Juan Martín y Maite Guijarro (1988), Impacto de la crisis económica sobre el gasto y financiamiento público, Seminario de alto nivel sobre la recuperación del progreso social en América Latina IDE/ILPES/UNICEF, Santiago, junio

MIDEPLAN (1985), Bases para la reactivación económica y social. Análisis de las políticas sugeridas por la Cámara de Industrias de Costa Rica

MIDEPLAN (1987), Costa Rica: diferencias geográficas en el nivel de desarrollo social, 1984, Documento No. 10 S.I.S., San José, julio

MIDEPLAN (1987a), Evolución económica y social de Costa Rica, año 1986, San José, julio

MIDEPLAN (1987b), El gasto público en los sectores sociales. Aspectos metodológicos, San José, julio

MIDEPLAN (1987c), Evolución económica y social de Costa Rica, primer semestre de 1987, diciembre

MIDEPLAN (1988), Evolución económica y social de Costa Rica en el año 1987, San José, mayo

MIDEPLAN (1988a), Costa Rica: el ajuste estructural en marcha, San José,

Ministerio de vivienda y asentamientos humanos (1988), Memoria mayo 1987- mayo 1988, San José

Ministerio de vivienda y asentamientos humanos (1988a), datos de actualización de la memoria mayo 1987-mayo 1988, noviembre

Ministerio de vivienda y asentamientos humanos (1988b), Relaciones entre demanda, construcción de vivienda, subsistemas de apoyo, documento elaborado por José Montealegre Orozco

Moritz, Nancy (1986), La situación de la mujer costarricense 1963-1985. Análisis estadístico basado en los censos y encuestas de hogares, MIDEPLAN, San José, noviembre



Naciones Unidas (1988), Plan especial de cooperación económica para Centroamérica, borrador final 11 de abril

OIT-PREALC (1987), Poverty and Labour Market in Costa Rica, Santiago

Matilde Pinto de la Piedra (1988), El componente social del ajuste económico en América Latina, Seminario de alto nivel: cómo recuperar el progreso social en América Latina IDE, ILPES, UNICEF, Santiago, junio

Molly Pollack (1985), Household Behaviour and Economic Crisis. Costa Rica 1979-1982, OIT-PREALC, Documentos de trabajo, Santiago

Eugenio Rivera Urrutia (1982), El FMI y Costa Rica, 1978-1982. Política económica y crisis, DEI, San José

Eugenio Rivera Urrutia (1984), Die Stabilisierungspolitik des IWF in Ländern mit repräsentativen Demokratie. Das Beispiel Costa Rica, Peripherie 15-16, Munster

Eugenio Rivera Urrutia y Ana Sojo (1986), El perfil de la política económica en Centroamérica: la década de los ochenta, en Rivera, Sojo y López, Centroamérica, Política económica y crisis, DEI, San José

Eugenio Rivera Urrutia (1987), La dinámica inflacionaria y las políticas de estabilización en Centroamérica y Panamá en la década de los ochenta, ponencia a Seminario CEMLA-Maestría en política económica UNA sobre Deuda externa y programas de ajuste, San José

Eugenio Rivera Urrutia (1987a), De la crisis a la estabilidad: la política de estabilización y ajuste estructural en la Costa Rica de los ochenta, Informe final investigación DEUNA, Heredia

Eugenio Rivera Urrutia (1987b), Mittelamerika: Die Rolle der Aussenverschuldung in einer geopolitisch umkämpften Region, en Altvater et. al., Die Armut der Nationen. Handbuch zur Schuldenkrise, von Argentinien bis Zaire, Rotbuch Verlag, Berlin

Eugenio Rivera Urrutia (1988) Deuda y ajuste estructural en economías pequeñas: el caso de Costa Rica, borrador de avance investigación para CRIES, Santiago

Eugenio Rivera Urrutia y Helio Fallas (1988), Agricultura y ajuste estructural en los países centroamericanos, IICA, mimeo, San José, abril.

Roy Rivera y Ludwig Gwendell (1988a), Orden y política social en Costa Rica, ponencia a taller regional Crisis y política social en Centroamérica. Tendencias y perspectivas, CSUCA y CUIC, El Salvador, octubre 1988, mimeo

Adrián Rodríguez (1986), Estudio del efecto redistributivo del subsidio generado en los programas públicos de financiamiento y dotación de vivienda en 1982, Documentos de trabajo IICE No. 98, San José, diciembre

Adrián Rodríguez (1986a), El gasto público en programas de seguridad social: estudio de su efecto redistributivo en 1982, Documentos de trabajo IICE-UCR No. 102, San José, diciembre

Adrián Rodríguez (1987), Deuda externa en Costa Rica: del desajuste a la renegociación... y por la renegociación el ajuste, Documentos de trabajo IICE No. 108, agosto

Ennio Rodríguez (1988), Encrucijada y futuro de Costa Rica, CEDAL, San José

Ennio Rodríguez et al. (1988a), Selección de actividades estratégicas y elaboración de una propuesta de programa complementario de fomento consistente con la concepción "exportaciones para el desarrollo", Informe final, OIKOS asesores económicos, noviembre

Ennio Rodríguez (1988b), Costa Rica: a Quest for Survival, en Stephany Griffith-Jones, Managing World Debt, Harvester Wheatsheaf y St. Martin's Press, New York

Miguel Angel Rodríguez (1980), A manera de prólogo en ANFE, El modelo económico costarricense, INLISA, San José

Gert Rosenthal (1986), Comentarios a Carlos Manuel Castillo, en French-Davis y Feinberg, op. cit.

José Manuel Salazar et al. (1988), Plan de acción para la promoción de las exportaciones agrícolas no tradicionales, Reporte 1-Volumen 1 de proyecto Precios, incentivos y reformas de políticas en el sector agropecuario de Costa Rica, mimeo

Jorge A. Sanguinetti, La salud y el Seguro Social en Costa Rica, borrador de Informe final del Proyecto de asistencia técnica Ministerio de Planificación/Banco Mundial Préstamo 2519 Componente No. 3

Pablo Sauma (1986), Los programas estatales de alimentación y nutrición: análisis de su impacto redistributivo en 1982, Documentos de trabajo IICE-UCR No. 96, San José, noviembre

Pablo Sauma (1986), Efectos redistributivos del gasto público en educación en 1982, Documentos de trabajo IICE-UCR No. 101, San José, diciembre

39  
Secretaría ejecutiva de planificación sectorial y recursos humanos (1987) Plan sectorial de desarrollo del sector educación y recursos humanos 1986-1990, Diagnóstico del sector-volumen II, Ministerio de Educación Pública, San José

SIECA (1988), Plan de acción inmediata (revisado), reunión de Vicepresidentes con Ministros de relaciones exteriores, Ministros responsables de la integración económica y desarrollo regional y Ministros de planificación de Centroamérica, Guatemala, 22 de enero, documento 16 de febrero

SIECA, Cuantificación del plan de emergencia contemplado dentro del plan de acción inmediata, SIECA/ROMRIECADRE/D.T.2 Rev.3, 12 de febrero

Ana Sojo (1981), Staatskapitalismus und innerbürgerliche Auseinandersetzung in Costa Rica (1970-1979), Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, bei der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Freien Universität Berlin. Traducido como : (1984), Estado empresario y lucha política en Costa Rica, EDUCA, San José

Ana Sojo (1983), ¿Crisis del estado empresario? en Rovira (compilador), Costa Rica hoy: la crisis y sus perspectivas, EUNED, San José

Ana Sojo (1984a), Morfología de la política estatal en Costa Rica y crisis económica, Estudios Sociales Centroamericanos No. 37, San José

Ana Sojo (1986), La democracia política y la democracia económica: una visión desde Costa Rica, Ciencias Sociales No. 31, San José y (1987) Cahiers VIII, Fondation internationale Lelio Basso pour le droit et la liberation des peuples, Roma, junio

Ana Sojo (1987a), La mujer en Centroamérica hoy: ciudadana de segunda clase? UNESCO-FLACSO, mimeo

Ana Sojo (1988), La ratio nacional de Esquipulas II: una visión desde Costa Rica, Polémica No. 5- segunda época, San José

Victor Tokman et. al. (1988), Asumiendo la deuda social: qué es, cuánto es y cómo se paga, Documentos de trabajo PREALC/318, marzo

Juan Diego Trejos y María Laura Elizalde (1985), Costa Rica : la distribución del ingreso y el acceso a los programas de carácter social. Resultados de una encuesta sobre gasto social, Documentos de trabajo IICE No. 90, noviembre

Juan Diego Trejos y María Laura Elizalde (1986), Ingreso, desigualdad y empleo. Evidencias recientes sobre las características y evolución del perfil distributivo, Ciencias Económicas Vol. VI No.2, San José

Juan Diego Trejos et.al. (1988) , Evolución de la crisis económica en Costa Rica y su impacto sobre el nivel de pobreza, IICE-MIDEPLAN, mimeo, mayo

José Manuel Valverde (1986), Elementos para la comprensión de la política estatal de vivienda en Costa Rica: el caso de la administración Carazo Odio , Tesis de Maestría Posgrado en Sociología SEP/UCR

Jorge Vargas Cullell (1988), Políticas de administración del fondo de subsidios para vivienda, Conferencia Salón Kamakiri, mimeo, setiembre

Juan Manuel Villasuso y Juan Diego Trejos (1982), Evolución reciente de la estructura salarial en Costa Rica, Documento de trabajo No. 32 IICE , San José, mayo

Juan Manuel Villasuso (1985), Bases para una estrategia económica y social. Respuesta a las políticas sugeridas por la Cámara de industrias de Costa Rica, MIDEPLAN, mimeo, marzo

Adrián Zumbado (1987), Exposición del Ministro de vivienda y asentamientos humanos ante el Consejo de gobierno , 18 de noviembre

ANEXO

Quadros

Quadro No. 1

INDICADORES ECONOMICOS PRINCIPALES								
COSTA RICA		1982	1983	1984	1985	PRELIMINAR 1986	PROYECCION 1987	1988
PRODUCTO INTERNO BRUTO								
Millones de colones		95,505.00	129,314.00	158,674.00	192,424.70	239,231.40	261,240.70	292,067.10
Millones de dólares US		2,451.70	3,111.30	3,573.70	3,813.00	4,269.00	na.	na
Tasa de cambio promedio		39.77	41.56	44.40	50.55	56.03	na	na
Población (en miles)		2,371.50	2,435.50	2,501.30	2,566.30	2,633.00	na	na
COMO PORCENTAJE DEL PIB								
Déficit comercial		0.90	3.90	2.70	4.70	2.00	3.60	4.40
Cuenta corriente de la balanza de pagos		-10.90	-9.10	-4.30	1.80	-0.20	0.20	-1.70
Déficit gobierno central		3.30	3.60	2.90	2.00	3.40	2.10	1.70
Consolidado sector público no financiero								
Déficit sector		9.00	3.10	2.00	1.90	2.00	0.70	0.00
Déficit combinado sector público					7.20	5.80	4.00	3.00
CAMBIO ANUAL (%)								
PIB real		-7.30	2.90	7.50	1.00	3.00	3.30	2.50
PIB real per cápita (colones)		-9.80	0.10	4.70	-1.50	-0.60	na	na
Precio al por mayor		79.10	5.90	12.20	7.60	na	na	na
Precio al consumidor		81.80	10.70	17.30	10.90	15.40	10.00	7.00
INDICADORES DEUDA PUBLICA EXTERNA								
Balance pendiente a dic. 31								
En millones US\$		2,981.80	3,427.20	3,523.50	3,708.80	3,643.90	na	na
Como porcentaje del PIB		121.60	110.10	98.60	97.30	85.40	na	na
Per cápita en US\$		1,257.30	1,407.20	1,408.70	1,445.20	1,383.90	na	na
Servicio Deuda después renegociación								
Como % de exportaciones de bienes y servicios		13.90	85.30	37.20	52.60	40.40	na	na
Pagos de intereses (atrasos y con- tractuales)								
Como % del PIB		2.80	18.20	6.40	8.90	4.60	na	na
Transferencias netas de capitales								
En millones de US \$			120.20	24.40	206.60	274.90	na	na

Fuente: Banco Central, Oficina de la deuda externa

CUADRO No. 2

SERVICIO HISTORICO DEUDA EXTERNA (COSTA RICA)

(millones de dólares US)

			PRINCIPAL		INTERESES		TOTAL		
PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL	Como % del PIB	Como % de Exp.	Como % del PIB	Como % de Exp.	Como % del PIB	Como % de Export.	
1983	179.30	656.60	835.70	5.70	20.50	18.20	64.80	23.90	85.30
1984	146.80	227.80	374.60	4.10	14.60	6.40	22.60	10.50	37.20
1985	171.30	335.60	506.90	4.50	17.80	8.80	34.80	13.30	52.60
1986	253.40	196.70	450.10	5.90	22.80	4.60	17.70	10.50	40.40

Fuente: Banco Central, Oficina de la deuda externa.

## CUADRO No. 3

## COSTA RICA: PAGOS CONTRACTUALES Y EFECTIVOS DE INTERESES

1985-1988

EN MILLONES DE DOLARES (US)

Acreedor/año	1985		1986		1987		1988	
	CONTRAC	EFFECT	CONTRAC	EFFECT	CONTRAC	EFFECT	CONTRAC	EFFECT
Bancos Comerciales	157.40	157.40	129.50	86.20	137.80	36.60	132.40	25.90
Bilaterales	56.60	34.20	53.90	22.50	55.60	23.40	52.00	13.80
Club Paris	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19.10	2.90	20.70	0.00
Otros	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	36.50	20.50	31.30	13.80
Multilaterales	79.40	79.50	73.50	74.20	86.30	79.60	85.90	56.40
Otros	33.10	38.60	18.80	12.40	18.90	6.40	19.00	5.60
TOTAL	326.50	309.70	275.70	195.30	298.60	146.00	289.30	101.70

## COMO PORCENTAJE DEL PNB

Acreedor/Año	1985		1986		1987		1988	
	CONTRACT	EFFECT	CONTRAC	EFFECT	CONTRAC	EFFECT	CONTRAC	EFFECT
Bancos Comerciales	3.98	3.98	2.95	1.97	3.07	0.82	3.13	0.61
Bilaterales	1.43	0.86	1.23	0.51	1.24	0.52	1.23	0.33
Club Paris					0.43	0.06	0.49	0.00
Otros					0.81	0.46	0.74	0.33
Multilaterales	2.01	2.01	1.68	1.69	1.92	1.77	2.03	1.33
Otros	0.84	0.98	0.43	0.28	0.42	0.14	0.45	0.13
TOTAL	8.25	7.82	6.29	4.45	6.65	3.25	6.83	2.40

Fuente: Banco Central de Costa Rica, Oficina de la deuda externa

a) Pagos efectivos a julio de 1988

b) PIB, en millones de dólares US: 3950 para 1986; 4385 para 1987, 4.489 estimados para 1987 y 4233 proyectados para 1988.



CUADRO No. 4

COSTA RICA: DEUDA EXTERNA PENDIENTE

a Diciembre 31, 1987

en millones de US \$

Tipo de acreedor	1987			
	Millones US \$	%	Intereses vencidos	TOTAL
Multilaterales	1,344.80	35.65	12.30	1,357.10
Bancos comerciales*	1,383.20	36.67	153.10	1,536.30
Bilaterales	945.00	25.05	64.30	1,009.30
Otros	98.90	2.62	1.00	99.90
TOTAL	3,771.90	100.00	230.70	4,002.60

\* Excluye aproximadamente \$130 millones de conversión de la deuda a colones denominados documentos.

FUENTE: Banco Central de Costa Rica, Oficina de la Deuda Externa.

**ESTRUCTURA DE LA PROTECCION ARANCELARIA NOMINAL : COSTA RICA**

	Anterior Arancel (Hasta 1985)		Nuevo Arancel (Desde 1986)	
	Protec. prom. nom.	Desvías. estándar	Protec. prom. nom.	Desvías. estándar
ECONOMIA TOTAL	52,8	61,5	31,5	29,4
SECTOR MANUFACTURERO	53,5	62,5	30,8	29,8
- Materias primas/bienes intermedios (producidos en Centroamérica)	54,3	72,6	34,1	21,9
- Materias primas/bienes intermedios (no producidos en Centroamérica)	32,6	29,3	11,2	11,3
- Bienes de capital (producidos en Centroamérica)	73,9	47,3	35,6	22,5
- Bienes de capital (no producidos en Centroamérica)	23,7	9,4	15,1	5,3
- Bienes finales de consumo (producidos en Centroamérica)	92,5	69,4	65,4	34,5
- Bienes finales de consumo (no producidos en Centroamérica)	135,0	70,7	78,4	37,9
- Bienes esenciales de consumo (producidos en Centroamérica)	40,6	27,0	13,2	10,1

Fuente: MIDEPLAN

CUADRO Nº 5a

TASAS DE DESEMPLEO, SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS  
1980 - 1986

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
<b>1. PAIS</b>							
. Sector Privado	5.2	8.5	8.3	8.0	6.8	6.2	5.8
. Sector Público	2.2	2.8	4.3	3.2	2.9	3.0	2.5
+ Gobierno Central	2.5	3.1	5.2	3.5	3.4	3.1	2.6
+ Inst. Autónomas	2.0	2.6	3.5	2.9	2.4	2.8	2.2
<b>2. VALLE CENTRAL NO METROPOLITANO</b>							
. Sector Privado	5.9	8.7	9.1	8.9	6.7	5.8	5.5
. Sector Público	2.7	2.5	3.5	2.8	3.5	2.4	2.3
+ Gobierno Central	2.7	2.3	4.0	3.2	4.8	3.9	2.5
+ Inst. Autónomas	2.7	2.7	2.6	2.3	2.1	1.3	2.2
<b>3. AREA METROPOLITANA</b>							
. Sector Privado	5.0	8.1	10.7	7.3	7.4	7.0	6.2
. Sector Público	1.7	3.4	5.7	3.1	2.3	3.2	1.6
+ Gobierno Central	2.4	4.5	6.7	3.9	2.3	2.9	2.2
+ Inst. Autónomas	1.3	2.7	5.0	2.4	2.4	3.4	1.2
<b>4. RESTO DEL PAIS</b>							
. Sector Privado	4.6	8.7	5.3	7.7	6.5	5.9	5.7
. Sector Público	2.5	2.5	3.4	3.7	2.5	3.4	3.8
+ Gobierno Central	2.2	2.6	4.1	3.4	2.2	2.8	3.8
+ Inst. Autónomas	2.7	2.3	2.8	3.9	2.8	3.9	3.8

Argüello y Labell, 1988

Fuente: Calculado de información en Encuesta Nacional de Hogares,  
Empleo y Desempleo, Op. Cit.

Quadro 58

COSTA RICA: FLUJO DE FONDOS AID

en millones US \$

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988 (*)
DONACIONES	-	42.7	100	165	80.6	120	125
PRESTAMOS BANCO CENTRAL	15	122	35	-	-	0.7	-
PRESTAMOS GOBIERNO	25.4	38.6	57.1	23.2	28.6	25.4	2.9
TOTAL	40.4	203.3	192.1	188.2	109.2	146.1	127.9

(\*) Estimado

FUENTE: Banco Central de Costa Rica

## CUADRO No. 6

## COSTA RICA. GASTO PÚBLICO DEDICADO A ALGUNOS SECTORES SOCIALES. 1975 - 1985

(miles de colones corrientes)

AÑO	TOTALES	EDUCACION	SALUD	TRABAJO Y SEG. SOCIAL	VIVIENDA	OTROS 1/
1975	6 088 291.2	932 475.4	1 476 327.3	608 142.9	126 328.7	2 908 598.6
1976	7 667 182.3	1 243 005.3	1 761 257.9	630 422.1	188 678.4	3 843 818.6
1977	10 348 253.1	1 550 052.4	2 095 511.8	774 165.7	234 403.7	5 694 119.5
1978	12 407 651.6	1 916 476.7	2 901 224.2	1 054 479.6	264 413.3	6 261 257.8
1979	14 870 745.4	2 307 532.5	3 930 052.0	1 455 936.1	359 948.9	6 817 279.5
1980	18 662 560.8	2 875 174.5	4 673 548.5	1 483 347.2	637 475.0	8 992 015.4
1981	22 137 024.1	3 443 934.0	4 533 741.8	1 473 480.7	406 862.0	12 278 985.6
1982	34 876 762.0	4 826 198.9	6 146 936.1	2 427 934.1	513 634.4	20 901 858.5
1983	53 606 103.9	6 709 286.9	9 154 936.7	3 287 932.1	1 230 641.8	33 223 286.4
1984	66 660 246.8	8 951 652.3	11 591 458.2	5 279 275.8	1 654 086.0	39 583 780.4
1985	78 459 658.8	10 209 503.7	13 402 978.6	6 994 025.4	1 766 145.2	46 086 395.9

C080606 \*\*\* SISTEMA DE INDICADORES SOCIALES \*\*\*

1/ Incluye otros sectores sociales y no sociales.

FUENTE: Información elaborada por NIDEPLAN con base en información oficial.

CUADRO No. 7

**COSTA RICA. GASTO PUBLICO EN COLONES CONSTANTES 1/ DEDICADO A ALGUNOS SECTORES  
SOCIALES 1975 - 1985**

ANO	TOTALES	EDUCACION	SALUD	TRABAJO Y SEG. SOCIAL	VIVIENDA	OTROS 2/
1975	2,273,430.9	350,291.3	554,593.2	228,453.4	47,456.3	1,092,636.6
1976	2,401,999.5	389,412.7	532,975.5	216,297.7	39,109.8	1,204,203.8
1977	2,770,616.5	415,007.3	561,047.3	207,273.3	62,758.7	1,524,529.9
1978	2,854,951.4	441,584.5	668,484.3	241,271.8	60,924.7	1,442,686.1
1979	2,996,926.5	465,040.8	792,029.8	293,417.2	72,541.1	1,373,897.6
1980	3,157,276.3	456,590.0	790,652.8	250,963.8	107,845.5	1,521,234.2
1981	2,967,827.4	461,715.2	607,821.7	197,544.1	54,549.1	1,646,197.3
1982	2,885,477.0	399,288.4	508,557.6	205,835.5	42,511.3	1,729,284.2
1983	3,128,456.6	391,554.5	534,284.0	191,884.0	71,820.4	1,938,913.7
1984	3,151,039.8	404,237.9	547,929.7	249,552.1	78,188.9	1,871,131.2
1985	3,011,054.3	391,814.5	514,371.5	268,411.8	67,780.1	1,768,676.4

C800786 \*\*\* SISTEMA DE INDICADORES SOCIALES \*\*\*

1/ Deflatado con el indice de Precio implicito del Gasto en Consumo Final  
de Gobierno General, tomado de folleto de Cuentas Nacionales de Costa Rica

2/ Incluye otros sectores sociales y no sociales.

FUENTE: Informacion elaborada por MIDEPLAN con base en informacion oficial.

CUADRO No. 8

**COSTA RICA. GASTO PUBLICO EN ALGUNOS SECTORES SOCIALES COMO PRO-  
PORCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO. 1975 - 1985**

(en colones corrientes)

ANO	TOTAL	EDUCA- CION	SALUD	TRABAJO Y S. SOCIAL	VIVIEN- DA	OTROS
1975	25.6	5.5	8.7	3.4	0.7	17.3
1976	37.0	6.0	8.2	3.3	0.9	18.6
1977	38.1	8.8	7.9	2.9	0.9	21.6
1978	41.0	6.3	9.6	3.5	0.9	20.7
1979	43.0	6.6	11.4	4.2	1.1	19.7
1980	45.1	6.9	11.3	3.8	1.6	21.7
1981	38.7	6.0	7.9	2.6	0.7	21.5
1982	35.8	4.9	6.3	2.6	0.5	21.5
1983	41.2	5.1	7.0	2.5	1.0	25.6
1984	42.0	5.4	7.3	3.3	1.0	25.0
1985	42.1	5.4	7.2	3.8	0.9	24.8

CGA1085 \*\*\* SISTEMA DE INDICADORES SOCIALES \*\*\*

FUENTE: Información elaborada por MIDEPLAN con base en información oficial  
y Banco Central de Costa Rica. Cuentas Nacionales de Costa Rica.

1. The first part of the paper is devoted to the study of the
 properties of the function  $f(x)$  defined by the
 equation

$$f(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$$

where  $f(x)$  is a function defined on the interval  $[0, 1]$  and
 satisfying the conditions

$f(0) = 1$	$f(1) = 1$	$f'(0) = 0$	$f'(1) = 0$	$f''(0) = 0$	$f''(1) = 0$
$f(0) = 1$	$f(1) = 1$	$f'(0) = 0$	$f'(1) = 0$	$f''(0) = 0$	$f''(1) = 0$
$f(0) = 1$	$f(1) = 1$	$f'(0) = 0$	$f'(1) = 0$	$f''(0) = 0$	$f''(1) = 0$
$f(0) = 1$	$f(1) = 1$	$f'(0) = 0$	$f'(1) = 0$	$f''(0) = 0$	$f''(1) = 0$
$f(0) = 1$	$f(1) = 1$	$f'(0) = 0$	$f'(1) = 0$	$f''(0) = 0$	$f''(1) = 0$
$f(0) = 1$	$f(1) = 1$	$f'(0) = 0$	$f'(1) = 0$	$f''(0) = 0$	$f''(1) = 0$
$f(0) = 1$	$f(1) = 1$	$f'(0) = 0$	$f'(1) = 0$	$f''(0) = 0$	$f''(1) = 0$
$f(0) = 1$	$f(1) = 1$	$f'(0) = 0$	$f'(1) = 0$	$f''(0) = 0$	$f''(1) = 0$
$f(0) = 1$	$f(1) = 1$	$f'(0) = 0$	$f'(1) = 0$	$f''(0) = 0$	$f''(1) = 0$
$f(0) = 1$	$f(1) = 1$	$f'(0) = 0$	$f'(1) = 0$	$f''(0) = 0$	$f''(1) = 0$

where  $f(x)$  is a function defined on the interval  $[0, 1]$  and
 satisfying the conditions

$$f(0) = 1, f(1) = 1, f'(0) = 0, f'(1) = 0, f''(0) = 0, f''(1) = 0$$

where  $f(x)$  is a function defined on the interval  $[0, 1]$  and
 satisfying the conditions